

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 169 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de San Antonio
CAUSA ROL : C-1472-2019
CARATULADO : REYES/GARCÍA

San Antonio, veintiocho de Septiembre de dos mil veinte

VISTO:

Con fecha 7 de agosto de 2019, comparece don José Alfredo Quirilao Mulato, abogado, cédula nacional de identidad N° 11.299.113-1, con domicilio en calle Agustinas N° 1442, oficina 702, T/B, comuna de Santiago, en representación convencional de doña Orieta Angélica Reyes Muñoz, chilena, cédula de identidad N° 12.464.609-K, con domicilio en calle Luis Valdés 2855, Puente Alto, interponiendo acción reivindicatoria en juicio ordinario, afirmando que su mandataria es dueña del inmueble ubicado en la comuna de San Antonio, el que tiene un valor fiscal al segundo semestre del año en curso de \$ 6.653.220, conforme al certificado de avalúo fiscal que acompaña.

Afirma que su representada no está en posesión de dicho inmueble, por lo cual deduce dicha acción en contra de don Iván Arturo García Oliveira, chileno, casado, trabajador independiente, cédula nacional de identidad N° 9.831.405-9, con domicilio en Avenida Antonio Palmieri N° 340 y calle Gregorio Mira N° 351, comuna y ciudad de San Antonio.

Señala que del certificado de dominio vigente que acompaña, consta que su representada, doña Orieta Angélica Reyes Muñoz, es dueña inscrita de la propiedad ubicada en Avenida Antonio Palmieri N° 340 y calle Gregorio Mira N° 351, comuna y ciudad de San Antonio, propiedad que se encuentra inscrita bajo el título de dominio a Fojas 5799, Número 2261, del Año 2004, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Agrega que el inmueble actualmente se encuentra en posesión del demandado de autos don Iván Arturo García Oliveira.

Hace presente que su representada con fecha 9 de abril del 2018, interpuso acción de precario en contra del demandado de autos, demanda que



«RIT»

Foja: 1

se radicó ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de San Antonio, bajo la causa Rol C-588 del año 2018, caratulado "Reyes con García", que dicha causa se encuentra concluida, con sentencia definitiva de fecha 18 de diciembre del 2018, y con la correspondiente certificación de encontrarse dicha sentencia firme ejecutoria, con fecha 02 de agosto del 2019.

Arguye, que no obstante haber acreditado su representada conforme los considerando quinto, sexto y séptimo de dicha sentencia, de un modo fehaciente, la posesión inscrita del respectivo inmueble, situación que es amparada por lo preceptuado en el inciso 2° del Artículo 700 del Código Civil, en que es reputada dueña, situación que fue reforzada por el propio demandado de precario, quien reconoció expresamente ocupar materialmente el inmueble de propiedad de su representada, tal como quedó establecido en el considerando octavo del fallo en comento, en el cual el título que habilitó al demandado de precario a ocupar materialmente el inmueble, fue la existencia de un acuerdo verbal con la demandante de precario y la señora suegra del demandado de precario, doña Ana Muñoz, madre de su representada, lo que fue reforzado con la prueba documental y testimonial rendida por el demandado de precario, acuerdo verbal que consistió en que el demandado de precario "construyera una vivienda" en el terreno o inmueble de propiedad de su mandante, vivienda que "quedaría" para la hija en común. No logrando en definitiva su representada mediante la acción de precario incoada, acreditar el tercero de los requisitos de la mera tolerancia, que se exige para dicha acción prospere, conforme lo prescribe el Artículo 2195 inciso segundo del Código Civil.

Solicita, se tenga por interpuesta demanda de acción reivindicatoria en juicio ordinario en contra del ocupante don Iván Arturo García Oliveira, ya individualizado, acogerla a tramitación, y en definitiva a condenar al demandado a restituir el inmueble de propiedad de su mandante, propiedad raíz ubicada en Avenida Antonio Palmieri N° 340 y calle Gregorio Mira N° 351, comuna y ciudad de San Antonio, con costas.

Con fecha 22 de agosto de 2019 se notificó la demanda al demandado.



«RIT»

Foja: 1

Con fecha 6 de septiembre de 2019 comparece Iván Arturo García Oliveira, chileno, casado, trabajador dependiente, cédula de identidad N°9.831.405-9, domiciliado en calle Antonio Palmieri N°340, comuna de San Antonio, contestando la demanda de acción reivindicatoria interpuesta en su contra, solicitando su rechazo, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que expone.

Señala que con la demandante contrajo matrimonio el día 14 de junio de 1991, el que fue bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, luego de ello con fecha 15 de octubre de 2004, por sentencia del Sexto Juzgado Civil de Santiago, se declaró nulo el matrimonio, quedando subinscrito con fecha 13 de abril de 2005, y que nunca se ha liquidado la sociedad conyugal. Indica que de dicho matrimonio nació la hija en común de ambos, Orieta García Reyes, de actuales 27 años de edad.

Agrega que con la demandante, mientras estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal, comenzó la posesión del inmueble materia de autos, el que fue mediante cesión de derechos, luego la demandante mediante Resolución N°057SA00002788, estando aún casada y no anulada, tal como lo señala la propia inscripción de fecha 06 de mayo de 2004 (sic).

Expresa que después que se declaró la nulidad del matrimonio, se fue a vivir a Estados Unidos, donde estuvo casi 12 años, tiempo durante el cual siempre tuvo una muy buena comunicación con la actora, y cuando decidió volver a Chile, se fue a vivir a la comuna de El Tabo, en el sector de Las Cruces, y a propuesta de la propia actora, quien en el año 2013 le señala que como tenían un sitio ubicado en San Antonio, específicamente en la calle Palmieri N°340, y que se había adquirido durante el matrimonio, y que hasta ese entonces se trataba de un terreno o sitio eriazo, sin construcción alguna, le ofrece la actora, que construya sin temor alguno, temiendo que alguien se tomara dicho terreno, y que en vez de comprar en la comuna de El Tabo, mejor invirtiera en ese terreno en particular, para vivir con su actual cónyuge, y que a futuro quedara para la hija en común, a lo que él accedió, puesto que a futuro sería en beneficio de la hija de ambos, por lo que una vez conversado con la hija y al estar ella de acuerdo, él comenzó a limpiar el terreno y hacer los cimientos.



«RIT»

Foja: 1

Expresa que posteriormente en el año 2017, dejaron de verse casi todo el año con la demandante, puesto que ella se encontraba embarazada, y su embarazo era de alto riesgo.

Asevera que con la actora, ambos concurren a pedir permisos de obras, y de ahí ella le hace entrega de las llaves, como también copia de la escritura y un talonario de contribuciones y de ahí, él comenzó con todos los gastos en forma personal y con dineros propios a la construcción de la casa, como también los gastos de los pagos de contribuciones, puesto que la actora había hecho una repactación de la deuda, una vez. Agrega que con la construcción de la casa, la que aún no ha terminado, gastó todo el dinero que tenía para la compra del inmueble, que en un comienzo había pensado en comprar en la comuna de El Tabo, esto es, gastó más de 30.000.000.- (treinta millones de pesos).

Expresa que la actora sólo esperó a que la casa estuviera casi terminada, para demandarlo de precario en el año 2018, en causa Rol C-588-2018, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, en el que no se le dio lugar a la actora, por no cumplir con el requisito de la mera tolerancia.

Arguye que de lo anterior sólo se puede observar la mala fe de la actora, en su actuar. Que esta mala fe, viene desde el momento en que ella le hace la oferta, que en vez de comprar una casa en la comuna de El Tabo mejor construya una casa en el terreno que se había adquirido durante el matrimonio, cuyo régimen patrimonial, era de sociedad conyugal, es más, la actora concurre a los tijerales de la casa, tenía total conocimiento de la construcción que se estaba haciendo.

Hace presente que nunca han liquidado la sociedad conyugal, y ese inmueble fue adquirido durante el matrimonio, y mediante una cesión de derechos.

Argumenta que, se ha entendido que los inmuebles adquiridos a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo, y estando la sociedad conyugal disuelta, pero no liquidada, según lo dispone el artículo 150, inciso séptimo, estos derechos entran a la partición de los gananciales. En consecuencia, la actora no puede demandar de reivindicación el inmueble materia de autos, mientras no se liquide la sociedad conyugal, puesto que el inmueble se encuentra en el haber absoluto de la sociedad conyugal.



«RIT»

Foja: 1

De esta manera, lo que la actora debió demandar, es de partición de los bienes que quedaron en la sociedad conyugal.

En cuanto al derecho, cita el artículo 44 inciso segundo del Código Civil y agrega que, para este caso en particular, la actora sabe y tiene total conocimiento de la construcción de la propiedad, al haber concurrido junto a él a la Dirección de Obras Municipales para pedir permiso de construcción.

Sostiene que el inmueble materia de autos, corresponde al haber absoluto de la sociedad conyugal, la que se encuentra disuelta, pero no liquidada, como tampoco se ha renunciado a los gananciales al momento de interponer la demanda. Por lo que, alega tener título para la ocupación del referido inmueble, en el derecho que le corresponde del haber social.

Luego indica que se debe determinar si el inmueble entró o no al haber de la sociedad conyugal, y para ello se toma en cuenta su naturaleza mueble o inmueble, y como éste se trata de un bien inmueble, hay que determinar si la adquisición fue a título gratuito u oneroso, y si ocurrió estando vigente la sociedad conyugal. Si la adquisición se hizo durante la sociedad conyugal, y de acuerdo con el artículo 1736 N° 1 del Código Civil, en el cual esta debe contabilizarse la adquisición del bien, desde el título y del modo, por lo que la posesión si se inició durante la vigencia de la sociedad conyugal, por lo que el plazo se completa también durante ésta, se entenderá que el bien es social. Por lo que, si el inmueble se adquirió por prescripción durante la sociedad conyugal, éste ingresa al haber social absoluto.

Añade que para determinar si el bien ingresó a título gratuito u oneroso, en el caso de la regularización según Decreto Ley 2695, se deberá determinar, según los exámenes de la documentación que se ha invocado para la regularización del bien inmueble.

Argumenta que en el caso en particular, la actora no puede pretender la obtención total de un bien, en que no se ha liquidado la sociedad conyugal, y que, además, ella concurrió para que ambos hicieran la documentación necesaria para la construcción, la que se hizo con dineros que aquél traía a su regreso a Chile, junto con su actual cónyuge.

Posteriormente concluye que el inmueble materia de autos, que se encuentra ubicado en calle Palmieri N°340, comuna y provincia de San



«RIT»

Foja: 1

Antonio, se trata de un inmueble en que comenzó la posesión durante la sociedad conyugal, que se trataba de un sitio eriazo, que no tenía ninguna construcción, inmueble que ingresó al haber de la sociedad conyugal, y que la demandante concurre junto a él para hacer todos los trámites necesarios para iniciar la construcción de la vivienda, y ahora pretende después que éste gastó todos los ahorros, tanto suyos como de su actual cónyuge, dejarlo sin nada, y desconocer un acuerdo que tenían, lo que demuestra todo su actuar de mala fe, puesto que la acción que debió realizar la actora es de partición, puesto que de lo contrario, lo que pretende es en la práctica obtener un enriquecimiento sin causa.

Solicita tener por contestada la demanda de acción reivindicatoria interpuesta por doña Orieta Angélica Reyes Muñoz, ya individualizada y rechazar la demanda en todas sus partes, con costas.

A folio 9, en el primer otrosí de su presentación, Iván García Oliveira, ya individualizado, deduce demanda reconvencional contra doña Orieta Angélica Reyes Muñoz, chilena, empresaria, cédula de identidad N°12.464.609-K, con domicilio en calle Luis Valdés N°2855, comuna de Puente Alto.

Solicita que por razones de economía procesal se den por reproducidos todos y cada uno de los de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de la contestación de la demanda, para fundar la demanda reconvencional, y que visto lo dispuesto en los artículos 314 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el mérito de estos autos y lo dispuesto en las normas citadas transcritas, se tenga por interpuesta demanda reconvencional en juicio ordinario en contra de doña Orieta Angélica Reyes Muñoz, ya individualizada en esta presentación, acogerla a tramitación y en definitiva, declarar y ordenar:

1°.-Que el inmueble inscrito a fojas 5.799, número 2.261 del registro de propiedad del año 2004, del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, pertenece a la comunidad de bienes que se formó por doña Orieta Angélica Reyes Muñoz y don Iván Arturo García Oliveira, una vez terminado el matrimonio por sentencia de divorcio, dado que se encontraban casados en sociedad conyugal.



«RIT»

Foja: 1

2°.-Declarar que la mitad de los derechos sobre dicho inmueble anteriormente individualizado e inscrito a fojas 5.799, número 2.261 del registro de propiedad del año 2004, del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, pertenecen a don Iván Arturo García Oliveira.

3°.-Que se condene a la demandada reconventional al pago de las costas.-

En el segundo otrosí de su presentación, el demandado ya individualizado, interpone, con el carácter de subsidiaria, demanda de indemnización de perjuicios en contra de Orieta Reyes Muñoz, ya individualizada.

Señala que con la demandante contrajeron matrimonio el día 14 de junio de 1991, el que fue bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, luego de ello con fecha 15 de octubre de 2004, por sentencia del Sexto Juzgado Civil de Santiago, se declaró nulo el matrimonio, quedando subinscrito con fecha 13 de abril de 2005, y nunca se ha liquidado la sociedad conyugal.

Añade que de dicho matrimonio nació la hija en común de ambos, Orieta García Reyes, de actuales 27 años de edad.

Explica que con la demandante, mientras estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal, comenzó la posesión del inmueble materia de autos, el que fue mediante cesión de derechos, luego la demandante mediante Resolución N°057SA00002788, estando aún casada y no anulada, tal como lo señala la propia inscripción de fecha 06 de mayo de 2004. (Sic)

Agrega que la demandante le propuso que con el dinero que trajo a su vuelta de Estados Unidos a Chile, en vez de comprar una vivienda en la comuna de El Tabo, mejor construyera en el terreno que se había adquirido durante la sociedad conyugal, y que además se encontraba sin nada construido, para evitar que no se lo tomaran, porque a futuro este quedaría para la hija en común. Hace presente que este terreno se encontraba en total abandono, siendo un sitio eriazo.

Señala que luego de pensar la propuesta hecha por su ex cónyuge, acepta la propuesta, y con su actual cónyuge, comienzan a limpiar primero el terreno.

Precisa que con la actora, concurrieron a la Dirección de Obras Municipales para comenzar hacer los trámites para la construcción, y ella firma la documentación y planos.



«RIT»

Foja: 1

Afirma que desde que se obtuvieron los permisos comenzó a asumir todos los gastos de la construcción, primeramente, haciendo la limpieza y desinfección, emparejando el terreno, viendo el alcantarillado y la luz para que tuviera la vivienda, encargándose de toda la obra y con recursos propios como también de su actual cónyuge.

Manifiesta que se ha realizado edificación, la construcción de la casa, lo que ha permitido el cuidado del predio, que era un sitio eriazo, para luego tener una casa con luz, agua potable, alcantarillado y que se encuentra totalmente cerrado, lo que hace aumente su valor de dicho inmueble.

Asevera que, cuando se hizo la fiesta de los tijerales de la casa que él había construido, la Sra. Orieta concurre y celebra en conjunto con su actual familia, dicho evento, que todo ello ha sido con conocimiento de la actora, quien fue su ex cónyuge.

Expone que desde la limpieza del predio y hasta la construcción, nunca tuvo ningún reparo por parte de la Sra. Orieta, sino más bien felicitaciones y halagos. Y solo una vez que está casi terminada, la actora primeramente demanda de precario en el año 2018 y este año de acción reivindicatoria, es decir, transcurrieron prácticamente 5 años en que lo engaña haciéndolo gastar e invertir en un predio, para luego, cuando éste aumenta evidencialmente el valor, pretender su obtención, lo que a todas luces es un enriquecimiento sin causa.

Explica que la construcción, es una vivienda de un piso, con tres dormitorios living-comedor baño y cocina, con radier, se hizo instalación de agua potable, alcantarillado y luz.

Indica que la inversión que hizo en la vivienda fue de \$30.000.000.- dinero que era producto, tanto de sus ahorros, y de su actual cónyuge.

Señala que se hizo un cierre perimetral, portón de entrada de fierro y jardinería por \$2.000.000.-

Agrega que, además, existe otro perjuicio sufrido por éste, consistente en el daño moral que ha sufrido, por cuanto, no solo la actora pretende que pierda todo su dinero invertido, sino que, además, con la demanda de precario, y esta demanda, le ha ocasionado padecer de diversas enfermedades, que lo están limitando, incluso, para poder trabajar, ya que es él la única persona que



«RIT»

Foja: 1

trabaja y da sustento al hogar. Dicho daño moral, lo avalúa en la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos). Sostiene que la procedencia de la indemnización reclamada, se encuentra en el menoscabo que ha sufrido, fundamentado en el artículo 1558 del Código Civil, y de la culpa grave que se asimila al dolo, siendo responsable no sólo de los perjuicios que son causa directa de su incumplimiento, al acuerdo, ya que pretende desconocer que existió un régimen patrimonial de sociedad conyugal no disuelta.

Indica que es necesario que se ordene que doña Orieta Reyes Muñoz, le pague el valor que aquél invirtió en la construcción de la vivienda, que actualmente tiene luz, agua, alcantarillado, que se encuentra cercada y tiene vereda y jardín.

En cuanto a la argumentación jurídica, señala que según lo dispuesto en el artículo 669 del Código Civil, que regula la accesión de mueble a inmueble, siendo aplicable a la situación lo dispuesto en el inciso segundo de dicho precepto, esto es, cuando lo plantado y edificado por un tercero por cuenta propia en terreno ajeno, lo hace a ciencia y paciencia del dueño del terreno, en ese evento se establece que el dueño del terreno deberá pagar el valor de la plantación y edificaciones para recobrar el inmueble.

Indica que la finalidad de esta norma no es otra que evitar el enriquecimiento injusto del dueño del predio a cuya ciencia y paciencia se ha edificado y plantado en él y que se ve beneficiada con esta cuantiosa inversión.

Asevera que esta norma se aplica a este caso, por cuanto afirma que hizo la construcción de una vivienda, con agua potable y alcantarillado, con luz, portón de fierro y jardín y una vez que estaba construida y casi terminada, después de 5 años la actora viene en desconocer un acuerdo de palabra, el que ella misma había ofrecido, viéndose aumentado el valor del inmueble de forma considerable. Por lo tanto, corresponde, que se condene a la demandada reconventional para poder obtener lo que le corresponde en el predio, al pago de la edificación, que asciende a \$32.000.000.- y en cuanto al daño moral a la suma de \$30.000.000.-



«RIT»

Foja: 1

Solicita tener por interpuesta demanda reconvencional subsidiaria en juicio ordinario en contra de doña Orieta Angélica Reyes Muñoz, ya individualizada, acogerla a tramitación y en definitiva, declarar y ordenar:

1°.-Que la demandada reconvencional deba pagar una suma no inferior a \$32.000.000.- o la suma que el tribunal estime, por el valor de la construcción de la vivienda, ya individualizada.

2°.-Que la demandada reconvencional deba pagar una suma no inferior a \$30.000.000.- o la que el tribunal estime como daño moral.

3°.-Que las sumas indicadas deben ser pagadas más el interés corriente -para operaciones no reajustables, desde que el tribunal lo estime.-

4°.-Que se condene a la demandada reconvencional al pago de las costas.-

Con fecha 13 de septiembre de 2019, comparece José Quirilao Mulato, por la demandante principal, evacuando el traslado de la réplica, solicitando que las alegaciones expresadas por la contraria sean rechazadas en todas sus partes por ser infundadas.

Señala que, efectivamente su mandante contrajo matrimonio con el demandado bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal; como también es efectivo que el día 15 de octubre de 2004, dicho matrimonio se declaró nulo por sentencia del Sexto Juzgado Civil de Santiago, pero no es efectivo que debía liquidarse la sociedad conyugal entre los cónyuges, toda vez que su mandante adquirió la propiedad de acuerdo a las disposiciones señaladas en el Decreto Ley N° 2695, en especial lo dispuesto en el Artículo 37 del referido decreto, conforme se señala en la sentencia definitiva de fecha 18 de diciembre del 2018, y que se encuentra ejecutoriada, con fecha 02 de agosto del 2019, del Primer Juzgado de Letras en lo Civil de San Antonio, en causa Rol C-588 del año 2018, -cuyos considerando cuarto, quinto, sexto y séptimo de la dicha sentencia, estima de relevancia para este juicio y transcribe literalmente.

Agrega que efectivamente las partes tienen una hija matrimonial de actuales 27 años de edad de nombre Orieta García Reyes, que efectivamente su mandante mientras estaba en matrimonio tuvo la posesión del inmueble, el cual adquirió por resolución de bienes nacionales, pero no es efectivo que previamente la adquiere mediante cesión de derechos.



«RIT»

Foja: 1

Indica que tampoco es efectivo que durante el periodo que el demandado estuvo en los Estados Unidos, haya tenido una muy buena comunicación con la actora.

Aclara que tampoco es efectivo que la actora el año 2013 le haya propuesto al demandado irse al sitio de calle Palmieri N°340, y menos que construyera con su dinero, ya que más bien éste, estando necesitado de un lugar para vivir, le solicita a su suegra, doña Ana Muñoz, que le deje vivir en dicho terreno, quien accede, acordando que ella le entregaría el dinero para la construcción de la vivienda.

Expresa que es efectivo que existió el juicio de precario con el demandado en la causa Rol C-588-2018, seguido ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio, el cual no dio lugar al precario, fallo que sí estableció el derecho de poseedor inscrito a su mandante.

Expresa finalmente, en cuanto al derecho invocado y las conclusiones a las arriba el demandado, respecto del inmueble de propiedad de su mandante que se encuentra ubicado en calle Palmieri N°340, comuna y provincia de San Antonio, no le son aplicables el derecho invocado, ya que su mandante es reputada dueña conforme a lo señalado en el decreto ley N° 2695, en especial conforme a lo dispuesto en su artículo 37 y demás normas aplicables.

Solicita tener por evacuado el traslado para la réplica.

En el segundo otrosí de su presentación, el demandante principal contesta la demanda reconvencional deducida por el demandado de autos y demandante reconvencional, Iván Arturo García Oliveira, ya individualizado, solicitando que sea rechazada en todas sus partes por carecer de fundamento plausible, con costas.

Al efecto solicita que por economía procesal, se den por reproducidos todos y cada uno de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho formulados en el traslado de la réplica.

A continuación, en el tercer otrosí de su presentación, la demandante principal y demandada reconvencional, contesta la demanda reconvencional subsidiaria de indemnización de perjuicios deducida en su contra por Iván Arturo García Oliveira, ya individualizado, solicitando que sea rechazada en todas sus partes por carecer de fundamentos plausible.



«RIT»

Foja: 1

Solicita que en los mismos términos formulados por ésta en el desarrollo del evacua traslado de la réplica y de la demanda reconvencional, que por economía procesal se den por reproducidos todos y cada uno de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

Luego expresa que, al efecto, debe hacer hincapié que la inversión en la vivienda la hizo la madre de su representada, doña Ana Muñoz, suegra del demandado de autos y demandante reconvencional, y en ningún caso el demandado, quien recibió depósitos de parte de su suegra por la suma de \$20.000.000, aproximadamente, quien en todo caso deberá demostrar la procedencia de tales dineros si los ha invertido.

En cuanto al cierre perimetral de la propiedad, portón de entrada de fierro, expresa que igualmente fue realizada mucho tiempo antes al hecho material de ocupar la propiedad el demandado de autos y demandante reconvencional, pues doña Ana Muñoz, el año 2001, encomendó a un maestro de la construcción del cierre en referencia y por un valor bastante menor a \$ 2.000.000 millones de pesos, y por lo tanto, nada se le debe al demandado de autos y demandante reconvencional.

Finaliza su presentación, aseverando que no existe perjuicio alguno sufrido por parte del demandado de autos y demandante reconvencional, generado por la demandante consistente en daño moral, razón por la que solicita tener por contestada la demanda reconvencional subsidiaria de indemnización de perjuicios deducida y rechazarla en todas sus partes, no dando lugar a las indemnizaciones reclamadas.

Con fecha 25 de septiembre de 2019, comparece Axel Caviedes Catalán, abogado, evacuando la réplica, ratificando en todas sus partes lo señalado en la contestación de la demanda, solicitando no hacer lugar a la demanda interpuesta, toda vez que no se cumple con los presupuestos fácticos para su otorgamiento, con costas.

En el primer otrosí de su presentación, evacúa la réplica de la demanda reconvencional de acción reivindicatoria, solicitando que se reivindique el derecho que le corresponde a su representado en el inmueble materia de autos. A continuación, en el segundo otrosí de su presentación, evacúa el traslado de la réplica reconvencional subsidiaria de indemnización de perjuicios,



«RIT»

Foja: 1

ratificando las acciones deducidas y solicitando, que sean acogidas todas las pretensiones de su representado, con costas, conforme lo solicitado en la demanda reconvencional.

Manifiesta que su representado jamás habló con la señora Ana Muñoz, como señala la demandada reconvencional. De haber sido cierto lo señalado por la demandada reconvencional, tendría la Sra. Ana Muñoz, que haber demandado y no su hija.

Expresa que los depósitos que señala habría efectuado la Sra. Ana Muñoz, madre de la demandada reconvencional, corresponde a que, como en esa época existía una buena relación familiar, ella le pidió a su representado, que el inmueble ubicado en calle Llaima N°400, en cerro Las Dunas, comuna de San Antonio, inmueble que ella quería arrendar, pero se encontraba en malas condiciones, ya que los últimos arrendatarios le reclamaban por el estado de la casa y harían abandono de ella, y le exigían que la arreglara aprovechando la buena relación que existía, ya que ellos constantemente visitaban la casa en Las Cruces, donde aquel estaba viviendo, y su representado debido a esta buena relación, aceptó pero con la condición que ella buscara al maestro (sic).

Debido a lo anterior es que el compromiso era que su representado compraba los materiales y ella le hacía devolución del dinero, pero tanto la Señora Ana Muñoz, como este otro inmueble, no son materia de este juicio, y lo que pretende la demandada reconvencional es mezclar ambos inmuebles, toda vez, que su representado en esos momentos se encontraba construyendo en calle Palmieri, es más, también quería ocupar el trabajador que estaba construyendo en calle Palmieri, sin embargo, él le dijo que no podía dejar abandonada esta otra construcción.

Agrega que una vez terminada la casa ubicada en calle Llaima 400, la madre de la demandada pudo arrendarla, circunstancia en la cual Iván García Oliveira también la acompañó a la Notaría el día que arrendó, prestando su colaboración, ya que doña Orieta Reyes, vive en Santiago. Puntualiza que su representado sólo actuó de buena fe con la señora Ana, y jamás ella o su hija Orieta entregaron dinero alguno para la construcción en calle Palmieri N°340, tal como pretenden hacer creer.



«RIT»

Foja: 1

Solicita tener por evacuado el traslado de la réplica reconvencional subsidiaria de indemnización de perjuicios, ratificando las acciones deducidas y que sea acogida en todas las pretensiones de esta parte, con costas.

Con fecha 2 de octubre de 2019, la demandada evacúa el traslado de la réplica reconvencional, solicitando se rechace la reivindicación solicitada por la demandante reconvencional, en virtud de las alegaciones formuladas por su parte.

A continuación, y en el otrosí de su presentación evacúa la réplica de la demanda reconvencional subsidiaria de indemnización de perjuicios, reiterando los fundamentos expresados en el escrito respectivo, ya que no existe perjuicio por parte del demandante reconvencional generado por su mandante, ya que cada una de las alegaciones expresadas por éste son falsas, pues quien ha actuado de buena fe ha sido precisamente doña Ana Muñoz, la suegra del demandado y demandante reconvencional, quien canceló los servicios de maestros.

Expresa que al efecto, su representada no se pronunciará sobre si hubo o no una buena relación con el demandado y actor reconvencional, sin embargo, indica que el actor reconvencional olvida que la familia Reyes Muñoz, compuesta por su hija Orieta García, y doña Ana Muñoz, le acogieron cuando fue deportado de Estados Unidos y la relación se quebró en la ocasión en que doña Ana Muñoz, le solicita al demandado y actor reconvencional, que como había vivido gratis por el lapso de dos años, era lógico que cooperara con el pago de las contribuciones. Asimismo, señala que son falsas las aseveraciones formuladas por don Iván Arturo García Oliveira, del hecho de haya ingresado dólares o dineros al país, desde los Estados Unidos, situación que en todo caso debió ser declarada a las autoridades pertinentes, agregando su mandante que el suscrito durante los años 2003 al 2007 aproximadamente, estuvo privado de libertad en los Estados Unidos, siendo deportado desde dicho país a Chile, a mediados del año 2007. Agrega que éste a fines del mismo año vuelve a ingresar ilegalmente a Estados Unidos, siendo el año 2008 deportado nuevamente a Chile, igual situación ocurrió entre el año 2009 y 2010, siendo deportado nuevamente a Chile, contrayendo matrimonio en septiembre del 2010.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que el demandado y demandante reconvenional, una vez radicado en la ciudad de Cartagena estuvo de allegado, en casa de su madre, viviendo a expensas de las remesas que le enviaba su actual cónyuge doña Elvia Liliana Rivera Cobos, e incluso, trabajó para una ferretería ubicada en Cartagena llamada Buseta, de la cual fue desvinculado.

Finalmente indica que resulta extraño que el actor reconvenional aluda a una casa en Las Dunas, ya que es algo ajeno a este juicio, y si bien se efectuaron arreglos según alude; éstos los efectuó un amigo de la hija de su mandante de nombre Juan Pablo Farías, quien pintó y arregló.

Con fecha 29 de octubre de 2019, se llevó a efecto la audiencia de conciliación, con la asistencia del demandado, Iván García Oliveira, asistido por su abogada, Patricia Izrael Olguín. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce por la inasistencia de la parte demandante.

Con fecha 5 de noviembre de 2019, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 10 de junio de 2020, se citó a las partes a oír sentencia.

Con fecha 17 de agosto del año 2020 el tribunal decretó como medida para mejor resolver la agregación en forma íntegra de los correos electrónicos enviados entre “IVAN GARCIA” y “Orie RM”, individualizados en el N° 10 del folio 66, citándose a audiencia de percepción de documentos electrónicos la que se llevó a efecto el día 31 de agosto de 2020 con la asistencia de ambas partes. Asimismo se ordenó oficiar al Banco de Crédito e Inversiones, a fin de que señalara los datos de individualización del titular de la cuenta N° 24223115, oficio cuya respuesta se agregó a los autos con fecha 26 de agosto de 2020.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

En cuanto a la objeción de documentos:

PRIMERO: Que, en el cuarto otrosí de la presentación de folio 16, la demandante objetó los documentos acompañados por la demandada consistentes en certificado de matrimonio emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, celebrado entre Iván García Oliveira y Orieta Reyes Muñoz; así como la copia de sentencia de la Corte Suprema pronunciada en Causa Rol 2554-2014 del 12 de noviembre de 2014; también objetó la copia



«RIT»

Foja: 1

autorizada emitida el 17 de julio del 2019, del documento agregado con el N° 417 al Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, y que corresponde a la Resolución Definitiva de regularización del inmueble materia de autos, emitida por el Ministerio de Bienes Nacionales, fundado en que nada aportan a este juicio por ser impertinentes. Manifiesta que el certificado de matrimonio sólo da cuenta de un estado civil de las partes, en algún momento; que la sentencia acompañada se refiere a otras partes en una situación distinta al presente juicio, y que el tercer documento carece de valor probatorio.

SEGUNDO: Que, la parte demandada no evacuó el traslado conferido oportunamente.

TERCERO: Que las objeciones formuladas por la demandante en el cuarto otrosí de su presentación de folio 16, habrán de ser desestimadas sin mayores dilaciones, por cuanto la impertinencia no es una causa legal que permita objetar un instrumento acompañado al juicio.

Por lo demás, dicha impugnación en el fondo sólo tiende a cuestionar el valor probatorio que tendrían los referidos documentos, tarea que por cierto es ajena a las partes litigantes y sólo corresponde ser ejercida por el órgano jurisdiccional al momento de ponderar los medios de prueba que fueron aportados al proceso.

CUARTO: Que, la parte demandada en su presentación rolante a folio 81 objetó el documento acompañado por la demandante a folio 72, signado con el N° 2, y acompañado también a folio 66 signado con el N° 9, consistente en copia simple de un cuadro de cuentas relativa a materiales de construcción, por cuanto se trata de un documento privado, que no tiene fecha ni firma, no se sabe quién lo escribe, por lo que carece de autenticidad.

A continuación objeta el documento signado con el N° 3, acompañado por la demandada a folio 72, consistentes en el Protocolo Operatorio (epicrisis) de Ana Muñoz Lagos, por cuanto ésta última no es parte en este juicio ni en la causa Rol C-588, que se ha solicitado traer a la vista; por la misma razón, objeta el certificado de defunción de Jorge Orlando Reyes Miranda, acompañado a folio 66 y signado con el N° 4, así como los documentos acompañados, también, a folio 66, signados con los N° 7 y 8,



«RIT»

Foja: 1

consistentes en copia de Libreta de Ahorros del Banco Estado N° 36561040901 y copia de Cartola de Movimientos de Fondos Mutuos BCI Rendimiento Serie Clásica , ambas a nombre de Ana Muñoz Lagos, por no ser ésta parte en este juicio ni haber declarado en él.

Luego objeta los documentos acompañados por la demandada a folio 66 bajo el N° 1, señalado como “presupuesto” el que objeta en conformidad al artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por su falsedad o falta de integridad, ya que se trata de una hoja de cuaderno firmada por Juan Sepúlveda, quien no ha declarado en este juicio, y porque en dicho presupuesto nada se señala a qué se refiere ni el domicilio. La misma causal invoca para objetar el documento acompañado a folio 66 N° 10, consistente en la impresión de correos electrónicos dirigidos entre Iván García y Orié RM, ya que no se conoce su autenticidad ni su integridad, porque no se sabe de qué correo electrónico salió, si realmente corresponde o no al demandado.

Objeta también el documento acompañado a folio 66 y signado con el N° 12, consistente en copias de depósitos, por cuanto no se sabe quién efectuó los depósitos ni los fines de los mismos.

Finalmente, objeta también el documento acompañado a folio 66 bajo el N° 5, consistente en un certificado de pago de contribuciones, por cuanto dicho documento se encuentra ilegible.

QUINTO: Que la demandante con fecha 6 de marzo de 2020 evacúa el traslado conferido justificando la pertinencia de cada uno de los documentos objetados.

SEXTO: Que la objeción formulada por la parte demandada en su escrito rolante a folio 81, respecto de los documentos consistentes en copia simple de un cuadro de ventas, acompañados por la contraria a folio 72 y 66, habrá de ser rechazada, por cuanto no es aquí que se ataque directamente al documento por su falsedad, sino que sólo se está señalando que al impugnante no le consta su autenticidad, lo que evidentemente por sí mismo no significa que el instrumento no sea auténtico. Dicha impugnación sólo tiende a dejar en entredicho el mérito probatorio del documento, tarea ajena a las partes y reservada al órgano jurisdiccional al momento de ponderar los medios de prueba aportados por las partes al proceso.



«RIT»

Foja: 1

Luego, las objeciones deducidas por la parte demandada respecto de la copia del Protocolo Operativo de la paciente Ana Muñoz Lagos, el certificado de defunción de don Jorge Reyes Miranda, las copias de la Libreta de Ahorros y de la Cartola de Movimientos Fondo Mutuo BCI Rendimiento Serie Clásica, ambas a nombre de Ana Muñoz Lagos, las copias de los depósitos acompañados bajo en N° 12 a folio 66, deberán ser rechazadas, por cuanto una objeción documental sólo puede fundarse, en los rubros de falsedad o falta de integridad, exigencia que no se satisface en las impugnaciones en comento.

Por lo demás, dichas impugnaciones en el fondo sólo tienden a cuestionar el valor probatorio que tendrían los referidos documentos, tarea que por cierto es ajena a las partes litigantes y sólo corresponde ser ejercida por el órgano jurisdiccional al momento de ponderar los medios de prueba que fueron aportados al proceso.

En lo tocante a la objeción formulada por el demandado respecto de la copia –impresión-de correos electrónicos dirigidos entre Iván García y Orieta RM, fundada en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se la funda en que no le constaría la autenticidad ni la veracidad de los documentos señalados, habrá de ser desestimada sin mayores dilaciones, por cuanto no es que aquí se ataque directamente a los documentos por falsedad o por no ser íntegros, sino que sólo se está señalando que al impugnante no le consta su autenticidad ni integridad, lo que evidentemente por sí mismo no significa que el instrumento no sea auténtico o no sea íntegro.

En lo que respecta a la objeción deducida respecto de la copia de un presupuesto firmado por Juan Sepúlveda, deberá ser desechada, toda vez que el impugnante no cuidó en señalar en qué consistiría la supuesta falta de integridad ni la supuesta falsedad de dichos instrumentos.

Finalmente, en lo relativo a la objeción del documento acompañado por la demandante a folio 66 bajo el N° 5 consistente en un certificado de pago de contribuciones, hace descansar la objeción en que éste es ilegible, objeción que deberá ser rechazada, por cuanto una objeción documental sólo puede fundarse en los rubros de falsedad o falta de integridad, exigencia que no se satisface en la impugnación en comento.

En cuanto a las tachas:



«RIT»

Foja: 1

SÉPTIMO: Que, a folio 65 la demandada formula tacha contra el testigo Juan Pablo Farías Serrano, de conformidad a la causal N° 7 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por tener íntima amistad con la persona demandante. Funda su tacha en que el testigo ha declarado ser amigo de la demandante por más de diez años, como también de todo el grupo familiar, en consecuencia, su declaración se encuadra dentro del artículo ya señalado, es decir, tiene íntima relación con la persona que lo presenta.

OCTAVO: Que, a folio 65 la demandante evacúa el traslado solicitando el rechazo de la tacha, por cuanto el testigo sólo ha declarado ser vecino de la familia Reyes Muñoz, luego ha declarado que tiene un grado de amistad con la hija del demandado, doña Orieta García Reyes, la cual tiene sentido en virtud de ser vecinos del barrio; distinta es la situación con la demandante, Orieta Reyes Muñoz, quien es parte de este juicio y no así la hija individualizada con quien dice tener algún grado de amistad. En consecuencia el grado de amistad íntima que formula la contraria en la especie, no concurre, por los hechos expuestos, razón por la cual solicita el rechazo de la tacha formulada.

NOVENO: Que se acogerá la tacha opuesta por la demandada, a folio 65, en contra del testigo presentado por la demandante Juan Pablo Farías Serrano, como quiera que del mismo interrogatorio para tachas, fluye que tiene una íntima relación de amistad con la demandante y su familia de más de diez años, e interrogado acerca de cuán amigo es de la actora, responde que lo es por ese mismo espacio de tiempo, agregando que visita a dicha familia cada dos días; lo que en concepto de esta sentenciadora es demostrativo de una amistad íntima. Se configura así la causal de inhabilidad alegada, del artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO: Que, a folio 68 la demandante formula tacha contra el testigo Héctor Waldo Trujillo Contreras, fundada en el artículo 358 N° 5 y 6, esto es, haber existido vínculo de subordinación y dependencia entre el testigo y el demandado al momento de construir la casa –materia de autos-, y por tener interés directo o indirecto en el presente juicio, toda vez que el testigo ha prestado declaración en otro juicio por el demandado, juicio que además la parte contraria ha solicitado traer a la vista.



«RIT»

Foja: 1

UNDÉCIMO: Que, a folio 68 la demandada evacúa el traslado, solicitando el total rechazo de las tachas opuestas, ya que el testigo no tiene vínculo actual con el demandado y demandante reconvencional, y, además, en cuanto al artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, el testigo señaló no tener interés en el juicio.

DUODÉCIMO: Que habrá de rechazarse la tacha deducida en contra del testigo Héctor Trujillo Contreras, fundada en el artículo 358 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que dicha norma al referirse a “trabajadores y labradores dependientes” de la parte que los presenta, exige actualidad en la prestación de los servicios, exigencia que no se satisface en este caso, pues el testigo señala que trabajó para el demandado, específicamente en la construcción del inmueble materia de autos, sin que exista, a la fecha de prestar su declaración, un contrato de trabajo entre ambos.

A su turno, habrá de rechazarse la tacha deducida en contra de Héctor Trujillo Contreras, fundada en el artículo 358 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la demandante hace descansar el pretendido interés del testigo, en la circunstancia de que éste prestó declaración en otro juicio seguido entre las mismas partes, lo que no conduce a esta sentenciadora a estimar que por este sólo hecho, aquél carezca de la imparcialidad necesaria para deponer en este juicio, habida cuenta que el interés que configura la pretendida inhabilidad es de tipo pecuniario o patrimonial en los resultados del juicio, lo que a la luz de lo expuesto y declarado por el testigo no se verifica.

En cuanto al fondo:

DECIMOTERCERO: Que, la demandante, Orieta Angélica Reyes Muñoz, deduce acción reivindicatoria en contra de Iván Arturo García Oliveira, fundada en que es dueña la propiedad ubicada en avenida Antonio Palmieri N°340 y calle Gregorio Mira N° 351 comuna y ciudad de San Antonio, inscrita a su nombre a fojas 5.799 N° 2261, del Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, inmueble que se encuentra actualmente en posesión del demandado. Hace presente que entre las mismas partes existió un juicio anterior-de precario-referido al mismo inmueble materia de autos, seguido ante este tribunal, Rol C-588 del año 2018, en el que recayó sentencia firme el 18 de diciembre del



«RIT»

Foja: 1

2018, que da cuenta de la existencia de un acuerdo verbal entre la madre de la actora, doña Ana Muñoz, y el demandado, para ocupar el bien raíz y construir en él una vivienda que quedaría para la hija en común de ambos.

En razón de lo anterior, y al encontrarse aún el demandado ocupando dicha propiedad, y siendo ella la dueña, interpone acción reivindicatoria en su contra, para que sea obligado a restituirle el inmueble de su propiedad.

DECIMOCUARTO: Que, el demandado, Iván Arturo García Oliveira, contestando la demanda esgrime, en lo esencial, que el inmueble cuya reivindicación reclama la actora no es de su propiedad exclusiva, sino un bien social perteneciente al haber de la sociedad conyugal de ambos, la que aún no ha sido liquidada. Funda lo anterior en el hecho de que, estando aún casados bajo dicho régimen patrimonial, la actora comenzó la posesión del inmueble materia de autos, mediante una cesión de derechos, y que adquirió definitivamente mediante Resolución N° 057SA00002788, subinscrita el 6 de mayo de 2004, esto es, antes de que el matrimonio fuera declarado nulo el 15 de octubre del 2004 por sentencia del Sexto Juzgado Civil de Santiago.

Alega que posterior a la declaración de nulidad del matrimonio, el demandado vivió doce años en Estados Unidos, y al regresar al país, con la intención de comprar un inmueble para él y su actual cónyuge, la demandante le ofrece construir una casa en el inmueble de calle Palmieri N° 340 que aún era un sitio eriazo, el que por acuerdo de ambos sería su vivienda y quedaría en el futuro para la hija en común de ambos, Orieta García Reyes, a lo que el demandado accede e invierte todo el dinero que tenía para la compra de un inmueble, una suma superior a los \$30.000.000 .- Sin embargo, una vez terminada la construcción de la casa, la actora lo demanda de precario en la causa Rol C-588 seguida ante este tribunal, de lo que se puede observar su mala fe, pues ella tenía total conocimiento de la construcción que él hacía.

Finaliza su presentación señalando que al no haberse liquidado nunca la sociedad conyugal, y haberse el inmueble adquirido durante el matrimonio por cesión de derechos, la actora no puede demandar su reivindicación, puesto que el inmueble se encuentra aún en el haber absoluto de la sociedad conyugal, por lo que pide que dicha acción sea rechazada en todas sus partes, con costas.



«RIT»

Foja: 1

DECIMOQUINTO: Que, la demandante, con el fin de acreditar los supuestos de hecho de su acción, rindió la siguiente prueba:

I.- Documental:

A folio 1, acompaña con las formalidades legales:

- 1.-Copia autorizada con vigencia al 16 de mayo de 2019 de la inscripción de Fojas 5.799 N° 2261 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, correspondiente a la propiedad ubicada en avenida Antonio Palmieri N° 340 y calle Gregorio Mira N°351, comuna de San Antonio, con certificado de vigencia, que acompaña nuevamente a folio 66.
- 2.-Copia de certificado de avalúo fiscal de la propiedad ubicada en Palmieri N° 340, comuna de San Antonio, del segundo semestre de 2019.
- 3.-Copia simple de certificación efectuada con fecha 2 de agosto de 2019 en causa Rol C-588-2018 seguida ante este tribunal.

A folio 66, acompaña con las formalidades legales:

- 4.-Set de dos fotografías, y en su reverso copia simple de un presupuesto firmado Juan Sepúlveda.
- 5.-Set de 4 fotografías.
- 6.-Certificado de defunción de don Jorge Orlando Reyes Miranda.
- 7.-Certificado de nacimiento de Orieta Angélica Reyes Muñoz.
- 8.-Copias de certificado de pago de contribuciones.
- 9.-Copia de certificado de Avalúo Fiscal del primer semestre de 2020, correspondiente a la propiedad ubicada en Palmieri N° 340, San Antonio.
- 10.-Copia de Libreta de Ahorros Banco Estado N° 36561040901, a nombre de Ana Muñoz Lagos.
- 11.-Copia de Cartola de Movimientos de Fondos Mutuos BCI Rendimiento Serie Clásica, de Ana Esperanza Muñoz Lagos.
- 12.-Copia simple de comprobante de depósito en Banco Estado, de fecha 12 de febrero de 2014 por \$3.100.000.-, en la cuenta corriente N° 38400005700, titular Iván García Oliveira.
- 13.-Impresión de pantalla de cinco correos electrónicos de fechas 16 de febrero de 2014, 27 de febrero de 2014; 7, 12 y 19 de marzo de 2014, dirigidos entre Iván García y Ori RM.



«RIT»

Foja: 1

14.- Copia de siete transferencias hechas desde la cuenta N° 24223115 del BCI a la cuenta N°38400005700 del Banco Estado, titular Iván García Oliveira, por \$700.000.- de fecha 8 de mayo de 2014, \$270.000 de fecha 5 de junio de 2014, por \$130.000 del 12 de junio de 2014, por \$300.000.- de fecha 19 de junio de 2014, por \$1.300.000.- del 25 de junio de 2014, por \$200.000 del 22 de septiembre de 2014, y \$200.000 de fecha 29 de octubre de 2014.

15.- Copia de cartola de Cuenta Ahorro Banco Estado N° 3656104091 y de 4 comprobantes de depósito por la suma de \$695.000 de fecha 9 de diciembre de 2013, por \$696.000 de fecha 6 de diciembre de 2013, por \$697.000.- de fecha 14 de enero de 2014 y por la suma de \$697.000.- del 13 de enero de 2014, todos hechos en la cuenta corriente N° 38400005700 del titular Iván Arturo García Oliveira.

A folio 72, acompaña con las formalidades legales:

16.-Copia simple de documento denominado cuadro de costos y gastos de materiales de construcción.

17.-Copia del Protocolo Operatorio de Clínica Oftalmológica Pasteur de la paciente Ana Muñoz Lagos.

A folio 83, acompaña con las formalidades legales:

18.-Copia simple de comprobante de pago de pensión de AFP Capital de Ana Muñoz Lagos.

II) A folio 1 se solicita tener a la vista Causa Rol C-588 de este tribunal, caratulada “Reyes con García”, materia: precario.

III) Testimonial:

A folios 65 y 67 rola el acta de declaración de los testigos Alan Contreras Cáceres, cédula de identidad N° 18.604.587-1, técnico en enfermería, con domicilio en calle Enrique Borrás N° 5231, comuna de San Joaquín, Región Metropolitana y Johanna del Pilar Valdivia Vargas, cédula de identidad N° 16.090.910-2, dueña de casa, domiciliada en Bordemar 567 Holanda Bellavista, comuna de San Antonio.

DECIMOSEXTO: Que, por su parte, el demandado García Oliveira, rindió la siguiente prueba:

I) Documental:

A folio 9, acompaña con las formalidades legales:



«RIT»

Foja: 1

1.-Certificado de matrimonio celebrado entre Iván Arturo García Oliveira y Orieta Angélica Reyes Muñoz, que acompaña nuevamente a folio 70.

2.-Copia de sentencia de la Excma. Corte Suprema pronunciada en Causa Rol 2554-2014, del 12 de noviembre de 2014.

3.-Copia autorizada del documento agregado con el N° 417, año 2004, al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio.

A folio 70, acompaña con las formalidades legales:

4.-Set de siete fotografías

5.-Set de quince fotografías

6.-Set de cuatro fotografías “compartiendo Fiesta Tijerales”.

7.-Set de 24 fotografías

8.-Copia de factura electrónica Chile Mat N° 65.902 de fecha 6 de julio de 2017, por un monto de \$93.000.-, a nombre de Iván García Oliveira.

9.-Copia de cuatro facturas electrónicas Construmart N° 4469686 de fecha 10 de julio de 2015, por un monto de \$157.810; N° 4469608 por un monto de \$30.011 de fecha 3 de julio de 2015, N° 0013086088 por un monto de \$45.960 de fecha 28 de enero de 2014, y la N° 0012844899 por \$ 45.960 de fecha 30 de enero de 2014, todas a nombre de Iván García Oliveira.

10.- Facturas electrónicas emitidas por Ferretería San Antonio N° 33313 por un monto de \$92.752 de fecha 31 de marzo de 2014, N°32259 por un monto de \$2950 de fecha 6 de marzo de 2014, N°39090 por un monto de \$130.451 de fecha de emisión 10 de septiembre de 2014, N°39339 por \$51.417 de fecha 17 de septiembre de 2014, N° 39306 por un monto de \$37.550 de fecha 16 de septiembre de 2014, N° 39313 por un monto de \$8.955 de fecha 16 de septiembre de 2014, N° 39246 por un monto de \$39.856 de fecha 13 de septiembre de 2014, N° 32917 por la suma de \$32.864 de fecha 21 de marzo de 2014, N° 32260 por un monto de \$41.501 de fecha 6 de marzo de 2014, N° 39154 por un monto de \$55.089 de fecha 11 de septiembre de 2014, N° 39014 por un monto de \$33.077 de fecha 8 de septiembre de 2014, y N° 33.493 por un monto de \$73.314 de fecha 3 de abril de 2014, todas a nombre de Iván García Oliveira.

11.- Copia de facturas emitidas por Maderas y Materiales Lotito, Elisa Flores y Compañía Limitada, N° 210385 por un monto de \$734.540 de fecha 29 de



«RIT»

Foja: 1

enero de 2014, N° 210561 por un monto de \$66.000.- de fecha 3 de febrero de 2014 y N° 210562 por un monto de \$2.870.- de fecha 3 de febrero de 2014, todas emitidas a nombre de Iván García Oliveira.

12.- Copia de cartola de clientes AFEX, a nombre de Iván García Oliveira, que registra movimientos desde el 4 de septiembre de 2008 a febrero de 2019.

13.-Certificado de Informaciones Previas N° 906, emitido por la Dirección de Obras Municipales de San Antonio, de fecha 10 de diciembre de 2013, a nombre de Iván García Oliveira.

14.- Boletas emitidas por Ferretería Cartagena N°649798 por \$21.453.- de fecha 18 de febrero de 2014, N° 650451 por un monto de \$7.798.- del 21 de febrero de 2014, y la N° 0666696 por un monto de \$3.990.- de fecha 4 de abril de 2014.

15.- Set de siete boletas emitidas por Ferretería San Antonio S.A N° 728320 por un monto de \$2310.- de fecha 10 de septiembre de 2014, N° 708035 por un monto de \$28.490 de fecha 17 de febrero de 2014, N° 706885 por un monto de \$10.680.- de fecha 6 de febrero de 2014, N° 707817 por un monto de \$ 63.434.- de fecha 14 de febrero de 2014, N° 707567 por un monto de \$52.170.- de fecha 12 de febrero de 2014, N° 708504 por un monto de \$21.186.- de fecha 20 de febrero de 2014, y N° 705611 por un monto de \$31.120.- de fecha 28 de enero de 2014.

16.- Boleta emitida por Ferretería Ferrus Limitada N° 001406, por un monto de \$20.467, de fecha 15 de octubre de 2014.

17.- Set de 3 facturas emitidas por Javier Cisternas Navarro y Compañía Limitada, Ferretería Tres Estrellas N° 96602 por un monto de \$147.320.- de fecha 18 de enero de 2014, N° 96802 por un monto de \$99.500.- de fecha 25 de enero de 2014, N° 98053 por un monto de \$34.230.- de fecha 25 de marzo de 2014, emitidas todas ellas a nombre de Iván García Oliveira.

A folio 71, acompaña con las formalidades legales:

18.- Set de 21 fotografías.

19.--Copia de pedido de venta N° 6253545 emitido por Construmart S.A, de fecha 28 de enero de 2014, por un monto de \$2.212.450.- a nombre de Iván García Oliveira.



«RIT»

Foja: 1

20.-Boleta Electrónica N° 82979 emitida por Sherwin-Williams Chile S.A, de fecha 30 de junio de 2015, por un monto de \$38.320.-

21.- Copia de Factura N° 19137 emitida por Marcelo Parada López E.I.R.L Venta de artículos de Ferretería, de fecha 9 de enero de 2014, por un valor de \$25.209.-, a nombre de Iván García Oliveira.

22.-Certificado de Línea 25, emitido por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de San Antonio, de fecha 10 de julio de 2014.

23.- Facturas emitidas por Ferretería San Antonio S.A., N° 34131 por un monto de \$10.686 de fecha 17 de abril de 2014 y N°33082 por un valor de \$92.385.- de fecha 26 de marzo de 2014 ambas emitidas a nombre de Iván García Oliveira.

24.- Copia de declaración jurada de Oscar Bernardo Álvarez Peña, de fecha 30 de julio de 2018, ante Notario Ximena Ricci Díaz.

25.-Copia de sentencia Rol C-2091-2017 seguido ante Primer Juzgado de Letras de San Antonio.

26.-Copia de sentencia de Corte Suprema Rol 13.561-2013, de fecha 30 de septiembre de 2014.

A folio 91, acompaña con las formalidades legales, en formato físico, quedando guardados en custodia del tribunal con el N° 399-2020 los siguientes documentos:

27.-Set de facturas electrónicas emitidas por Construmart Llolleo-Construmart S.A, N°4104068 por un monto de \$20.403.- de fecha 30 de enero de 2014, N° 3957608 por un valor de \$117.000 del 16 de enero de 2014, N° 3671854 por un monto de \$49.592.- del 15 de enero de 2014, N° 4999271 por un monto de \$9.380.- del 5 de octubre de 2016, N°4765758 por un monto de \$16.950.-de fecha 2 de abril de 2016, N° 4819747 por un monto de \$22154.- del 13 de mayo de 2016, N° 4889753 por un monto de \$21.071.- del 13 de julio de 2016, N° 5133210 por un monto de \$23.430 del 28 de diciembre de 2016, N°4819691 por un monto de \$21.730.-de fecha 9 de mayo de 2016, N° 15240854 por un monto de \$19.990.- del 22 de marzo de 2018, N° 14716665 por un monto de \$27.410.- del 19 de julio de 2017, N° 5133453 por un monto de \$6.910 del 13 de enero de 2017 y N° 14812618 por un monto de \$8.980 del 27 de septiembre de 2017 todas emitidas a nombre de Iván García Oliveira.



«RIT»

Foja: 1

28.- Set de 11 boletas electrónicas emitidas por Construmart Llolleo, N° 7826650 por un monto de \$3.570.- de fecha 18 de diciembre de 2014, N° 7282311 por un monto de \$13.174.- de fecha 18 de octubre de 2014, N° 7825632 por un monto de \$4.026.- de fecha 4 de diciembre de 2014, N°7463794 por un monto de \$11.540 de fecha 5 de diciembre de 2014, N° 5665000 por un monto de \$21.050.- de fecha 10 de abril de 2014, N°7460244 por un monto de \$2.690.- de fecha 15 de octubre de 2014, N° 7282370 por un monto de \$10.417.- de fecha 18 de octubre de 2014, N° 11725173 por un monto de \$92.434.-de fecha 30 de marzo de 2016, N°11725599 por un monto de \$5.140 .- de fecha 6 de abril de 2016, N°11727552 por un monto de \$2.878 .- de fecha 13 de mayo de 2016, N°13224989 por un monto de \$1.390 .- de fecha 28 de diciembre de 2016, y N° 13658321 por un monto de \$2.290.- de fecha 13 de enero de 2017.

29.- Set de 10 facturas electrónicas emitidas por Construmart Llolleo- Construmart S.A a nombre de Iván García Oliveira, N° 4469611 por un monto de \$ 61.590.- de fecha 4 de julio de 2015; N° 4765795 por un monto de \$279.144.- de fecha 6 de abril de 2016; N° 5120819 por un monto de \$66.445.- de fecha 7 de enero de 2017; N° 15240459 por un monto de \$28.240.- de fecha 22 de marzo de 2018; N° 44696608 por un monto de \$30.011.- de fecha 3 de julio de 2015; N° 44696686 por un monto de \$157.810.- de fecha 10 de julio de 2015; N° 42286600 por un monto de \$40.840.- de fecha 30 de octubre de 2014; N° 3958371 por un monto de \$683.093.- de fecha 11 de marzo de 2014; N° 4251742 por un monto de \$13.935.- de fecha 4 de diciembre de 2014, y N° 14784130 por un monto de \$43.850.- de fecha 31 de agosto de 2017.

II) Testimonial:

A folio 68 rola el acta de declaración de los testigos Francisco Hernann Santis Zúñiga, cédula de identidad N°12.604.902-1, independiente, con domicilio en avenida Eucaliptus N° 101, módulo 18, departamento 102, comuna de Santo Domingo; Jorge Guillermo Soto Briceño, cédula de identidad N° 7.146.130-0, trabajador independiente, domiciliado en Los Aromos 1169, Llolleo; Oscar Bernardo Álvarez Peña, cédula de identidad número 8.026.946-3, contratista, domiciliado en Balmaceda 49, Cartagena y Héctor Waldo Trujillo Contreras,



«RIT»

Foja: 1

cédula de identidad N° 10.327.560-1, domiciliado en Condell N°1045, comuna de Cartagena.

III) A folio 48, se solicitó tener a la vista Causa Rol C-588 de este tribunal, caratulada “Reyes con García”, materia: precario.

IV) Pericial:

A folio 112 rola informe pericial confeccionado por Arturo Caneo Figueroa, Arquitecto Tasador , cédula de identidad N°10.543.484-5 , domiciliado en calle Alemparte N°0136, Quilpué, designado por el tribunal a fojas 102, previa audiencia en la cual las partes no arribaron a acuerdo en cuanto a la designación. A folio 103 rola el acta de visita de terreno, que indica respecto de la propiedad periciada “acceso sin problemas a todos los recintos. Vivienda construida sin regularizar (primer piso), servicio de electricidad regularizado, agua y alcantarillado sin regularizar. El informe pericial de folio 112 contiene las siguientes conclusiones:

1.- El terreno en cuestión se encuentra ubicado en la zona centro habitacional de la ciudad, teniendo condiciones formales de sitio eriazo, pero encontrándose en la actualidad con una vivienda construida de un piso, pero sin regularizar.

El avalúo fiscal de la propiedad periciada se encuentra por debajo del valor promedio.

2.-En relación al avalúo fiscal de propiedades habitacionales, al realizar una proyección de dicho avalúo se llega a \$20.781.706.- aproximadamente. El avalúo fiscal proyectado de la propiedad periciada se encuentra por debajo del valor promedio, sin embargo, se aproxima a las propiedades cuya relación terreno/construcción es similar.

3.-En relación al valor venta de los sitios, la proyección de venta de los mismos es de 5 veces al avalúo fiscal, sin embargo, hay que descontar un 15% aproximado del valor de venta final producto de la negociación. Así, el valor de venta, como sitio eriazo, según lo indicado sería de \$28.806.356.-

4.-En relación al costo de construcción, existen dos valores a considerar, a saber:

El primero, desprendido de la tabla del MINVU que arroja un valor de \$14.003.740,4.-



«RIT»

Foja: 1

El segundo, dice relación con los valores promedio de mercado, que otorga un valor de \$26.892.000.-

Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que ambos valores no contemplan costos relacionados con los empalmes, conexiones y proyectos relacionados con los servicios, valor que podría ser de \$3.500.000.-, el que habría que sumar al valor total de construcción, descontando un porcentaje por no estar terminado el proceso de regularización de agua y alcantarillado, llegando a \$3.000.000.- aproximadamente, el valor de lo realizado.

V) Se solicitó se oficiara al Ministerio de Bienes Nacionales de Valparaíso, a fin de que remitiera copia de todo el expediente cuya resolución N°057SA00002788, de fecha 06 de mayo de 2004, otorga título de dominio a doña Orieta Reyes Muñoz, oficio cuya respuesta fue agregada con citación con fecha 15 de septiembre de 2020.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en cuanto a la acción principal, la acción entablada es la que contempla el artículo 889 del Código Civil, esto es, la reivindicación o acción de dominio, que es aquella que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.

De manera que, por definición, el que pretenda ejercer la acción reivindicatoria debe tener el derecho de dominio de la cosa singular que reivindica, debe estar privado o destituido de la posesión de ésta y debe enderezarla en contra del poseedor para que éste sea condenado a la restitución de dicha cosa singular.

Así, y como en la situación de autos la actora reivindica un inmueble determinado, tiene la carga procesal de probar, entonces, su dominio sobre el mismo, que el demandado está en posesión de él y que lo reivindicado corresponde a una cosa singular.

DECIMO OCTAVO: Que, respecto del *primer* supuesto de la acción deducida, esto es, la calidad de dueña que afirma tener, la demandante acompañó a folios 1 y 66 , con citación y sin que fuere objetado, copia autorizada de la inscripción de dominio a fs. 5799, con el N° 2261 correspondiente al Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces



«RIT»

Foja: 1

de San Antonio del año 2004, que da cuenta que la demandante es dueña de la propiedad ubicada en cerro Placilla,

Avenida Antonio Palmieri N°340 y Calle Gregorio Mira N°351, comuna de San Antonio, que tiene los siguientes deslindes: Al Norte, con Calle Gregorio Mira en 11, 80 metros, separado por reja metálica; Al Este, con María Eugenia Castro Mancilla en 11, 50 metros, separado por cerco y con René Espinoza Madrid en línea quebrada de dos parcialidades de 0,50 metros y 14, 90 metros, separado por pandereta; Al Sur, con Avenida Antonio Palmieri en 12,70 metros separado por reja metálica; Al Oeste, con Luz María Escalante Durán, en línea quebrada de dos parcialidades de 22, 80 metros, separados por pandereta.

Dicho documento, además, cuenta con certificación de vigencia del dominio, y comprueba de manera fehaciente la posesión inscrita de la demandante, respecto del inmueble individualizado en la demanda, y por ende, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 700 del Código Civil, debe ser reputada dueña del mismo, presunción que no ha sido desvirtuada por prueba en contrario en este proceso.

En efecto, si bien el demandado alega que el inmueble, materia de autos, pertenecería a la sociedad conyugal habida entre ambos, en virtud de matrimonio que fuera declarado nulo por Sentencia del Sexto Juzgado Civil de Santiago de fecha 15 de octubre del 2004,-según consta de certificado de matrimonio acompañado a folio 70, y no objetado-, lo cierto es que tal como señala la propia inscripción, el inmueble fue adquirido por la demandante por Resolución N° 057SA00002788 del 6 de mayo del 2004, dictada por el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Quinta Región, inscripción a la que se procede, al tenor de dicho documento, por aplicación de lo dispuesto en los artículos Primero a Séptimo y Décimo y siguientes del Decreto Ley 2.695 de 1979. En razón de lo anterior, resulta aplicable al caso concreto el artículo 37 de dicho estatuto legal, el que dispone expresamente que: “La mujer casada se considerará separada de bienes para los efectos de ejecutar los derechos que establece esta ley a favor de los poseedores materiales, y para todos los efectos legales respecto del bien objeto de la regularización”.



«RIT»

Foja: 1

A partir de lo señalado anteriormente se concluye, que el inmueble materia de la litis no ingresó al haber de la sociedad conyugal, por lo que tampoco le es aplicable lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil, toda vez que el citado artículo 37 del Decreto Ley 2.695 no lo establece, lo que lleva a desechar la alegación del demandado en tal sentido, cuestión que por lo demás, ya fue resuelta en Causa Rol C-588-2018 sobre precario, seguida ante este tribunal entre las mismas partes y referida al mismo inmueble, y que ambas solicitaron traer a la vista en esto autos, en la que recayó sentencia firme y ejecutoriada, cuya copia de certificación de ejecutoria se acompaña a folio 3 por la demandante, sin ser objetada.

En este orden de cosas cabe indicar que la parte demandada confunde la situación en que se encontraría un marido casado bajo el régimen de sociedad conyugal que adquiere un inmueble en virtud del Decreto Ley 2.695, estando vigente la sociedad conyugal, respecto al cual parte de la doctrina ha estimado ingresaría al haber absoluto de ella si la posesión se inicia durante su vigencia. Sin embargo, situación muy distinta es la que acontece respecto a la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal por cuanto el decreto ley señalado establece, como ya de indicare, que la mujer casada bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, se considerará como separada de bienes para todos los efectos legales, sin que el inmueble ingrese en caso alguno al haber social.

Corroboran lo concluido respecto al dominio del inmueble la copia autorizada del documento agregado con el N° 417 al Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, acompañado por el propio demandado a folio 9 y no objetado, consistente en la Resolución N° 057SA00002788 de fecha 6 de mayo del 2004, de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la copia del expediente remitido por Bienes Nacionales, documentos en los que consta que el peticionario, y en definitiva, a quien se concedió la regularización de la posesión del inmueble materia de autos, fue exclusivamente a la demandante.

Los antedichos instrumentos, en su conjunto, justifican plenamente el dominio, por parte del demandante, de la propiedad antes individualizada.



DECIMONOVENO: Que en cuanto al *segundo* requisito para la procedencia de la acción deducida, vale decir, que el demandado sea el actual poseedor del inmueble materia de la litis, conveniente es recordar que según el artículo 700 del Código Civil “la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que *el dueño o el que se da por tal* tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. De este modo, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 714 del mismo cuerpo legal, lo que distingue a un poseedor de un mero tenedor, es que el poseedor tiene la cosa, pero no reconoce dominio ajeno, pues en él concurre el ánimo de señor o dueño de la cosa objeto de la posesión. En efecto, la posesión apunta a la ocupación de una cosa, es decir, a tenerla en poder, sin que importe mayormente la existencia de un título o derecho para ello. En términos generales, la posesión es un hecho más que un derecho sobre la cosa, lo que no obsta a que confiera al poseedor ciertos derechos con respecto al bien que posee. Los elementos de la misma son el corpus, entendido como el poder físico o potestad de hecho sobre la cosa, y el animus, que consiste en la intención de obrar como propietario.

Ambos elementos, se consideran concurrentes, a juicio de esta sentenciadora, pues en lo tocante a la tenencia o potestad de hecho sobre la cosa, ésta resulta acreditada de los propios dichos de las partes litigantes en sus escritos principales de demanda y contestación, y refrendados por la declaración de los testigos del demandado, así, Francisco Santis Zúñiga, refiriéndose a este hecho expresa a folio 68 “ el demandado vive ahí, lo conozco del trabajo, lo que me consta porque varias veces me ha tocado ir a dejarlo a ese domicilio”, y a su turno, Jorge Soto Briceño , declara que “ es efectivo que el demandado principal se encuentra en posesión de dicho inmueble, lo que yo sé es que el demandado construyó la casa en ese terreno”, y por lo que indica Héctor Trujillo Contreras al señalar que “ es efectivo que el demandado se encuentra en dicho inmueble, me consta porque cada vez que paso por ahí lo veo en su casa”. Tratándose de la declaración de tres testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias esenciales, sin tacha, legalmente examinados y que dan razón de sus dichos, y no habiéndose esta prueba



«RIT»

Foja: 1

desvirtuado por otra prueba del proceso, no puede sino darse por acreditado el elemento material de la posesión que se reclama.

Ahora bien, en lo tocante al animus, el mismo fluye claramente de lo expresado por el demandado en su contestación, quien aunque erradamente según ya fue analizado en el considerando anterior, ha considerado siempre que el terreno en que construyó la vivienda que quedaría para la hija en común con la demandante, pertenecía a la sociedad conyugal que existió entre ambos, por lo que no reconoce dominio ajeno y no puede por lo mismo ser considerado un mero tenedor.

A partir de lo expresado anteriormente debe darse por concurrente en la situación sub-judice, el segundo elemento de la acción reivindicatoria, esto es, que el demandado sea el actual poseedor del bien que se reivindica, pues el mismo demandado así lo reconoció en su contestación y fluye de las pruebas ya analizadas, de manera que resulta un hecho establecido de la causa que la demandante ha sido privada del inmueble sub lite, sin que las alegaciones efectuadas por el demandado a este respecto, en cuanto a la forma como entró en posesión del inmueble materia de la litis, sean idóneas a objeto de desvirtuar la concurrencia de los requisitos ya analizados.

En efecto, habiéndose reconocido por ambas partes litigantes la existencia de un acuerdo verbal que permitió al demandado entrar en posesión del inmueble, no ha existido, sin embargo, prueba de inscripción a su favor en términos que le permitan alegar derechos sobre el inmueble materia de la litis.

VIGÉSIMO: Que en lo atinente al tercer supuesto de la acción instaurada, vale decir, que lo reivindicado corresponde a la misma cosa singular que está en posesión del demandado, cabe señalar que esta exigencia se encuentra justificada en el caso sub-judice, toda vez que el inmueble singularizado en la demanda corresponde precisamente a aquel que el demandado admite mantener en su poder, lo que le sirvió de antecedente para demandar reconvencionalmente, en el primer otrosí de su presentación principal, solicitando que se declarara que dicho inmueble pertenece a la comunidad de bienes que se formó con la demandante una vez terminado el matrimonio por declaración de nulidad del mismo, y en el segundo otrosí y en subsidio de lo anterior , indemnización de perjuicios por daño moral y



«RIT»

Foja: 1

enriquecimiento sin causa, todo relativo al mismo inmueble, conforme se analizará.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, consecuentemente, y concurriendo todos los requisitos de la acción dominical propuesta, no cabe sino acoger la demanda reivindicatoria deducida.

En cuanto a las demandas reconvencionales:

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, según lo señalado en la parte expositiva de esta sentencia, el demandado accionó reconvencionalmente contra la actora, deduciendo en el primer otrosí de su presentación principal rolante a folio 9 de autos, acción para obtener la declaración de que el inmueble materia de la litis, pertenece a la comunidad de bienes que se formó entre ambos, al haberse disuelto el vínculo matrimonial que los unía por sentencia de nulidad, dictada por el 6 Juzgado Civil de Santiago el 15 de octubre de 2004, aprobada el 8 de noviembre del mismo año y subinscrita el 13 de abril del 2005.

Hace descansar su pretensión en el hecho de que la actora y demandada reconvencional, durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, comenzó a poseer el inmueble materia de autos, mediante una cesión de derechos, y que finalmente lo adquirió por Resolución N°057SA00002788 del Ministerio de Bienes Nacionales, de fecha 6 de mayo del 2004, esto es, estando aún casada y no anulada. Por lo anterior, considera que el inmueble ingresó al haber absoluto de la sociedad conyugal, ya que si bien esta última se disolvió por sentencia de nulidad matrimonial, nunca fue liquidada ni tampoco se hizo renuncia a los gananciales al momento de interponer la demandada, por lo que pide que se declare que la mitad de los derechos del inmueble sub-lite le pertenecen y se condene a la demandada al pago de las costas.

A su turno, la demandante contestó la demanda reconvencional, alegando que es la única dueña del inmueble; que si bien existió entre ambos matrimonio celebrado bajo el régimen del sociedad conyugal, no es efectivo que ésta debiera liquidarse, toda vez que aquella adquirió la propiedad de acuerdo a las disposiciones señaladas en el Decreto Ley N° 2.695, en especial



«RIT»

Foja: 1

el artículo 37 del mismo cuerpo legal conforme al cual el inmueble jamás ingresó a la sociedad conyugal.

Agrega que efectivamente durante el matrimonio comenzó a poseer el inmueble, pero que nunca hubo cesión de derechos, y la adquisición definitiva se produjo por la Resolución de Bienes Nacionales, ya citada.

VIGÉSIMO TERCERO: Que tal como se dejó asentado a propósito de la acción principal, el inmueble respecto del cual el demandado principal y demandante reconvencional, alega haber ingresado al haber absoluto de la sociedad conyugal y consecuentemente reclama pertenecerle la mitad de los derechos sobre el mismo, no ingresó en definitiva a dicho haber, sino que fue adquirido por la actora y demandada reconvencional en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 a 7 y 10 y siguientes del Decreto Ley 2.695, como consta en la copia autorizada de la inscripción de fs.5.799 N° 2261 del Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, acompañada a folio 1 y no objetada.

Además, conforme a la copia autorizada del documento agregado con el N° 417 al Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, allegado al proceso por el propio demandado a folio 9 y no objetado, resulta claramente establecido que la actora –peticionaria de la regularización del bien raíz materia de la litis- es quien ha ejercido “por más de cinco años, la posesión material sobre el mencionado inmueble, en forma exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, la que adquirió por cesión informal de derechos de don René Prudencio Reyes y otros, según instrumento privado suscrito el 5 de octubre de 2001 ante la Notario de San Antonio doña Ximena Ricci Díaz...”

Así las cosas, es un hecho establecido que la adquisición del inmueble fue realizada por la actora por Resolución del Ministerio de Bienes Nacionales de fecha 6 de mayo del 2004, la que se produjo en conformidad a las normas precitadas del Decreto Ley 2.695, lo que implica que no obstante encontrarse aún casada bajo el régimen de sociedad conyugal al momento de dicha adquisición, por aplicación de las normas en comento y en especial el artículo 37 de dicho Decreto Ley, el bien materia de la litis no ingresó al haber absoluto de la sociedad conyugal, ya que respecto de dicha adquisición por



«RIT»

Foja: 1

expresa disposición legal, la mujer casada es considerada separada de bienes no sólo para efectos de ejercitar los derechos que dicho cuerpo legal establece, sino *“para todos los efectos legales referentes al bien objeto de la regularización”*..

Lo anterior lleva a esta sentenciadora a concluir, tal como se hizo en la Causa Rol 588-2018 seguida ante este mismo tribunal y que se ordenó traer a la vista, que al inmueble materia de la litis tampoco le es aplicable lo dispuesto en el artículo 150 del Código Civil, habida cuenta que el artículo 37 del Decreto Ley 2.695 así no lo dispone.

En nada altera lo que se ha venido razonando, la alegación del demandante reconvencional en orden a que la adquisición de la posesión por parte de la demandada reconvencional estuvo precedida de una cesión de derechos, por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Ley 2.695, es la Resolución del Servicio que acoge la solicitud de regularización de la propiedad la que se considera como justo título, y una vez practicada su inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, permite al interesado-en este caso la demandada reconvencional- adquirir la calidad de poseedor regular del inmueble para todos los efectos legales. Agrega la norma que, transcurridos dos años completos de posesión inscrita no interrumpida, contados desde la fecha de la inscripción, el interesado se hará dueño del inmueble por prescripción, la que no se suspenderá en caso alguno.

Atendido lo analizado precedentemente resulta a todas luces evidente que deberá denegarse la pretensión formulada reconvencionalmente por don Iván García Oliveira, en el primer otrosí de su presentación de fecha 6 de septiembre de 2019, rolante a folio 9 de autos, desde que al no haber ingresado el inmueble materia de la litis al haber absoluto de la sociedad conyugal, carece de título para reclamar derechos sobre el mismo.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, corresponde ahora pronunciarse acerca de la demanda reconvencional subsidiaria interpuesta por el demandado contra la actora, en el segundo otrosí de su presentación principal rolante a folio 9, en que deduce acción de indemnización de perjuicios fundada, en lo esencial, en el enriquecimiento sin causa que habría experimentado el patrimonio de la actora, desde el momento en que el demandado afirma que con su dinero-



«RIT»

Foja: 1

ascendente a la suma de \$30.000.000.- construyó en el sitio de la primera, una vivienda que por acuerdo de ambos él podría edificar y ocupar para vivir con su actual cónyuge, la que en la posteridad “quedaría” para la hija en común que tuvieron con la actora. El daño se produjo, a su juicio, cuando la demandante desconociendo dicho acuerdo, espera a que la casa esté terminada para demandar su restitución, primero, en causa de precario seguida ante este tribunal Rol C-588-2018, y, segundo, en la presente causa, ocasionándole un daño patrimonial, ascendente a la inversión de \$30.000.000.- que representan todos los ahorros que tanto él y su actual cónyuge trajeron producto del trabajo desarrollado en Estados Unidos, y que aquélla, sabiendo que éste pensaba invertir en la construcción de su casa propia en la comuna de El Tabo, le ofrece en lugar de ello construir en el sitio eriazo adquirido por la primera durante la sociedad conyugal, el que en el futuro sería de la hija de los litigantes. A esa cantidad se añaden los \$2.000.000.- que el demandante reconvenicional asevera haber invertido en el portón de entrada de fierro y jardinería del inmueble materia de este juicio. Funda esta pretensión en el inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, que pretende evitar el enriquecimiento injusto del dueño del predio a cuya ciencia y paciencia se ha edificado.

Agrega que la indemnización de perjuicios comprende también el daño moral que se le ha ocasionado, ya que los litigios con la actora le han causado diversas enfermedades que limitan su capacidad de trabajo, el que avalúa en la suma de \$30.000.000.-y cuyo fundamento legal se encontraría en el artículo 1558 del Código Civil, que asimila la culpa grave al dolo y que haría responder a la actora no sólo de los perjuicios que son causa directa de su incumplimiento al acuerdo, ya que pretende desconocer que existió un régimen patrimonial de sociedad conyugal no disuelta.

A su turno, la actora contestó la demanda reconvenicional, solicitando que sea rechazada en todas sus partes, pidiendo que por razones de economía procesal se den por reproducidos todos y cada uno de los fundamentos de hecho y de derecho formulados al evacuar el traslado para la réplica de la demanda principal. De suerte que, en lo atinente a la reconvenición subsidiaria, ello implica, en lo esencial, que la actora controvierte el hecho de



«RIT»

Foja: 1

haberle propuesto al demandado en el año 2013 ir a vivir al sitio de Calle Palmieri N° 340, comuna de San Antonio, aseverando que fue Ana Muñoz, su madre y suegra del demandado, quien permitió que este último viviera en dicho terreno, pues no tenía lugar donde vivir, acordando que ella le entregaría dinero para la construcción de la vivienda. Hace hincapié en que fue doña Ana Muñoz quien hizo depósitos al demandado ascendentes a la suma de \$20.000.000.- y que el cierre perimetral de la propiedad, un portón de entrada de fierro, también fue hecho y costado por aquella. En atención a lo anterior, pide que la demanda reconvencional subsidiaria sea rechazada en todas sus partes, no dando lugar a las indemnizaciones reclamadas, ya que el inmueble en litigio es de su propiedad, pues no pertenece a la comunidad de bienes que existió entre las partes.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, habiendo fundado el demandante reconvencional su pretensión resarcitoria en el enriquecimiento injustificado y el daño moral resultante de la infracción de un acuerdo de las partes, deberá analizarse cada una de las fuentes generadoras de las obligaciones indemnizatorias reclamadas.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en lo que dice relación con el enriquecimiento injustificado, si bien no se trata de una institución regulada sistemáticamente en el Código Civil, lo cierto es que la doctrina civilista suele otorgarle un doble carácter, esto es, en cuanto principio general del derecho y en cuanto fuente de obligaciones. Así, se señala que el enriquecimiento injustificado en cuanto principio “consiste en que el derecho repudia el enriquecimiento a expensas de otro sin una causa que lo justifique. Y en cuanto fuente de obligaciones, consiste en una atribución patrimonial sin una justificación que la explique, de modo que, constatada, se impone la obligación de restituir.” (Peñailillo, Daniel, “El enriquecimiento sin causa. Principio y fuente de obligaciones” en Revista de Jurisprudencia y Doctrina 2, III, página 426).

En tanto principio, la Corte Suprema en Causa Rol N°1245-2018 ha señalado que al enriquecimiento injusto “se lo liga con una noción predominantemente económica, rechazando el legislador que se obtenga tal ganancia sin causa jurídica. Se pretende evitar, de esta manera, que una persona se enriquezca a



«RIT»

Foja: 1

costa de otra si no puede justificar jurídicamente este beneficio, por lo que si se reúnen los presupuestos que la hacen procedente, se origina la obligación de restituir lo adquirido ilegítimamente o, más exactamente, de indemnizar el empobrecimiento ajeno”. Luego, el máximo tribunal junto con reconocer que no existe norma específica que lo establezca como principio general, señala que hay muchas instituciones y soluciones jurídicas que se inspiran en él y que “así sucede precisamente con el caso de la accesión de bienes muebles a inmuebles prevista en los artículos 668 y 669 del Código Civil, por cuanto, de no regularse esta materia en particular, se obtendría por el dueño del suelo un enriquecimiento injustificado” (Corte Suprema, Causa Rol 1245-2018, Considerando Sexto).

Ahora bien, el demandante reconvencional hace descansar parte de su pretensión resarcitoria en el hecho de haber construido una casa en terreno de la demandada reconvencional, con materiales que compró con su propio dinero, el que invirtió en limpiar el suelo, aplanarlo y construir la vivienda, lo que en su concepto hace aplicable a este caso el inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, lo que lleva a esta sentenciadora a determinar el sentido y alcance de la disposición en comento, para luego definir si corresponde o no su aplicación, y por consecuencia, la indemnización que se reclama.

VIGÉSIMO SEPTIMO: Que, el inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, dispone que: “ Si se ha edificado, plantado o sembrado a *ciencia y paciencia del dueño del terreno*, será éste obligado, para recobrarlo, a pagar el valor del edificio, plantación o sementera.” A la luz de lo dispuesto en la citada norma, lo que hace procedente la restitución del valor invertido, es que además de haberse edificado, plantado o sembrado con materiales propios en suelo ajeno, dicha situación esté amparada por algo más que un conocimiento especial de parte del dueño del terreno. Lo anterior fluye de la expresión “a ciencia y paciencia” del inciso segundo del citado artículo 669, diferente al inciso primero del mismo que prescribe: “El dueño del terreno en que otra persona, *sin su conocimiento*, hubiere edificado, plantado o sembrado, tendrá derecho de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, mediante las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe en el título *De la reivindicación*, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el



«RIT»

Foja: 1

justo precio del terreno con los intereses legales por todo el tiempo que lo haya tenido en su poder, y al que sembró a pagarle la renta y a indemnizarle los perjuicios”.

La aludida distinción es reconocida por la Corte Suprema, al establecer que: “el precepto en cuestión busca normar el conflicto que se suscita cuando una persona ha edificado, plantado o sembrado en un terreno de dominio de otra.

Bajo tal supuesto, la situación ha de administrarse en términos tales que ninguno de los involucrados se enriquezca injustificadamente en desmedro del otro.

Entendidas las cosas de esta manera, parece necesario preguntarse acerca del criterio que permite asignar entre los implicados las consecuencias patrimoniales de la edificación, plantación o siembra. Y, el examen de los dos incisos que configuran el artículo 669, muestra que dicho criterio se designa con dos expresiones. En el inciso primero "conocimiento"; en el inciso segundo "ciencia y paciencia".

Si se ha edificado, sembrado o plantado sin conocimiento del dueño, se aplican las reglas de las prestaciones mutuas y, entonces, será necesario distinguir si quien construyó se encontraba de buena o mala fe.

Como se ve, entonces, el artículo 669 regula las consecuencias de la edificación, plantación o siembra en suelo ajeno distinguiendo si el dueño tuvo conocimiento es decir, si la actividad tuvo lugar a ciencia y paciencia del dueño o no y establece consecuencias diversas para cada uno de esos dos escenarios”, y luego agrega “ la pregunta que ha de responderse es ¿qué ha de entenderse por "conocimiento" o, lo que es lo mismo, qué ha de significar que la actividad haya tenido lugar a "ciencia y paciencia del dueño" (Corte Suprema, Causa Rol 38.141-2017, Considerando Décimo Cuarto). Más adelante, el máximo tribunal, señala que debe desecharse la idea de que “conocimiento” deba entenderse como simplemente el saber o tener noticia elemental de algo”. Luego en lo tocante al inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, expresa: “Que el conocimiento no puede significarse como simple "saber" queda acreditado por una idea persistente que distintos autores han sostenido en el ámbito nacional en los últimos cien años y es que el inciso



«RIT»

Foja: 1

segundo del artículo 669 no disciplinaría, propiamente, un caso de accesión, sino una especie de pacto entre las partes.

Aquí no es necesario evaluar la corrección de dicha idea; ésta basta, sin embargo, para descartar la noción del conocimiento como mero saber. Se requiere algo más. Y aquello que se requiere es que haya existido, al menos, una *apariencia de consentimiento* por parte del propietario del terreno en la edificación, plantación o siembra en terreno ajeno.

Esa apariencia de consentimiento y no el mero saber del dueño es lo que determina que la buena o mala fe entendida como conocimiento del hecho del dominio ajeno de quien ocupa el predio, no sea relevante, pues lo ocupa amparado en una autorización, real o, al menos, aparente del dueño; por lo mismo, su conocimiento de que el predio no es de su propiedad deviene irrelevante” (Corte Suprema, Causa Rol 38.141-2017, Considerando Décimo Quinto).

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, sentado lo anterior, una correcta interpretación del inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, en que el demandante reconvencional funda parte de su pretensión resarcitoria, lleva a considerar como requisitos para que el mismo pueda aplicarse a un caso concreto los siguientes: 1) Que quien reclama la restitución del valor, haya sembrado, plantado o edificado en suelo ajeno, 2) que dicha siembra, plantación o edificación se haya hecho a ciencia y paciencia del dueño del terreno, y 3) que quien sembró, plantó o edificó lo haya hecho con materiales o recursos propios.

VIGÉSIMO NOVENO: Que en lo tocante al primer requisito, esto es, que se haya edificado en suelo ajeno, es un hecho no controvertido entre las partes, que el demandante reconvencional, Iván García Oliveira, construyó una casa habitación en la propiedad ubicada en Calle Palmieri N°340 y Calle Gregorio Mira N° 351 comuna de San Antonio; lo que sin perjuicio de ello, se ve reforzado por la prueba documental allegada al proceso por el demandado principal y actor reconvencional, a folios 70 y 71, no objetadas, consistentes en Certificado de Informaciones Previas N° 906, del 10 de diciembre de 2016 y Certificado de Línea N° 25 del 10 de julio de 2014, ambos emitidos por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de San Antonio a



«RIT»

Foja: 1

nombre de don Iván García Oliveira y referidos a la propiedad ubicada en Avenida Antonio Palmieri N° 340, comuna de San Antonio; así como por la declaración de los testigos del actor reconvencional , en acta de folio 68, Héctor Trujillo Contreras y Oscar Álvarez Peña, quienes están contestes en el hecho de haber realizado para aquél trabajos de construcción en la propiedad ya individualizada.

Atendido lo anterior y habiéndose ya resuelto en el considerando décimo octavo de autos, que el inmueble ubicado en calle Palmieri N° 340 y Calle Gregorio Mira N° 351 comuna de San Antonio, es de propiedad exclusiva de la demandada reconvencional, Orieta Reyes Muñoz, se tiene por suficientemente acreditado que el actor reconvencional edificó en suelo ajeno.

TRIGÉSIMO: Que, en lo relativo al segundo requisito que hace aplicable el inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, esto es, que quien edificó en suelo ajeno lo haya hecho “ a ciencia y paciencia” del dueño del terreno, asentado que dicho inciso no regula propiamente un caso de accesión de mueble a inmueble, sino una especie de pacto entre las partes, o al menos, una apariencia de consentimiento por parte del propietario del terreno en la edificación, debe definirse si dicho pacto o, al menos, apariencia de consenso, existió o no en el caso sub-lite.

Al respecto, resulta contradictoria la aseveración de la demandada reconvencional, quien niega en su presentación de folio 16 la existencia de un acuerdo con el actor reconvencional y demandado principal, en orden a vivir y construir en el terreno ubicado en Calle Palmieri N°340, señalando que sólo se trató de una petición del actor -carente de vivienda- a doña Ana Muñoz, madre de la demandada, de vivir en ese lugar; lo que no se condice con lo expresado por la propia demandada reconvencional en su escrito principal rolante a folio 1. En dicha presentación, refiriéndose a la causa de precario Rol C-588-2018 seguida ante este tribunal entre las mismas partes y relativa al mismo inmueble, y que se trajo a la vista, expresa: “el título que habilitó al demandado de precario a ocupar materialmente el inmueble, fue la existencia de un acuerdo verbal con la demandante de precario y la señora suegra del demandado de precario, doña Ana Muñoz”. Enseguida, agrega que dicho “acuerdo verbal consistió en que el demandado de precario-actor



«RIT»

Foja: 1

reconvencional de esto autos- construyera una vivienda en el terreno o inmueble de propiedad de mi mandante, vivienda que quedaría para la hija en común”. A dicho acuerdo hace referencia, también, la declaración del testigo del demandado, Alan Contreras Cáceres, rolante a folio 67, quien interrogado acerca del motivo por el cual el demandado principal y actor reconvencional ocupa el inmueble materia de la litis, responde: “en el año 2013, hizo como un trato con la señora Ana, que le pasaba plata en mano para que yo le construyera la casa, yo soy testigo de eso porque ella tiene problemas a la vista y en algunas ocasiones tuve que acompañarla, me consta porque trabajé en el terreno haciendo labores de limpieza antes que se construya”

Por otro lado, el propio demandante reconvencional en su presentación de folio 9 invoca la existencia del acuerdo con la demandada a objeto de que el primero construyera un inmueble en el terreno en cuestión, vivienda que “quedaría” para la hija de ambos.

El actor reconvencional rinde, además, a folio 68, la testimonial de Oscar Álvarez Peña, que declara haberle hecho en la propiedad de autos la instalación de agua y alcantarillado, y la de Héctor Trujillo Contreras quien afirma haber sido contratado por aquél para construir en el inmueble materia de la litis porque “llegó a un acuerdo con la señora Orieta-demandada reconvencional-para que construyera su casa en ese terreno”.

Las probanzas recientemente referidas -considerando además el matrimonio que existió entre las partes del juicio- configuran las bases para construir, mediante un proceso lógico deductivo, una presunción judicial con mérito probatorio suficiente por su gravedad y precisión, para dar por establecido el hecho de que entre las partes existió el acuerdo invocado por el demandante reconvencional.

Así, a juicio de esta sentenciadora, se tiene por concurrente el segundo requisito que hace aplicable el inciso segundo del artículo 669 del Código Civil, esto es, que la edificación fue hecha en terreno ajeno “a ciencia y paciencia” de su dueño- la demandada reconvencional-.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, sentado lo anterior, resta por definir si concurre el tercer requisito que hace aplicable la precitada norma, esto es, que quien edificó lo hizo con materiales-valores- propios.



«RIT»

Foja: 1

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, la carga de la prueba recae en el demandante reconvencional, pues es él quien invoca la existencia de la obligación de restitución, esto es, que la demandada le indemnice, o más propiamente, le restituya los valores que aquél invirtió al construir en el terreno que a ella le pertenecía.

A objeto de acreditar tales gastos, el demandante reconvencional rinde la prueba documental rolante a folios 70, 71 y 91, no objetada, consistentes en boletas y facturas electrónicas, emitidas a su nombre y por la adquisición de materiales de construcción, cercanas a la suma de \$4.665.073; a folio 71 copia de pedido de venta N° 6253545 emitida por Construmart S.A. de fecha 28 de enero de 2014, por un monto de \$2.212.450.- también a su nombre, y no objetada. Tales documentos, en tanto instrumentos privados emanados de terceros que no han comparecido en juicio reconociéndolos ni ratificándolos, nada acreditan por sí mismos.

Rindió también la testimonial consistente en la declaración de don Oscar Álvarez Peña, quien señala que realizó trabajos de instalación de agua por \$500.000.-, de alcantarillado por \$600.000.- y por la cruce de agua del alcantarillado por la suma de \$800.000.- en el inmueble de marras, los que afirma habersele pagado por el actor reconvencional; asertos que concuerdan parcialmente con declaración jurada del mismo, acompañada a folio 71 y no objetada, en que indica que recibió de don Iván García Oliveira, la suma de \$1.500.000.- por obra vendida correspondiente a instalación de agua potable y conexión de alcantarillado en el inmueble materia de la litis. Declara, también, Héctor Trujillo Contreras, quien afirma haber sido contratado por García Oliveira para construir su casa, que dicho contrato fue de palabra, encargándosele toda la obra gruesa del inmueble sub-lite, lo que le tomó aproximadamente un mes y medio, y que fue aquél quien le pagó \$8.000.000.- por la obra gruesa, a través de pagos semanales, y que respecto de la demandada reconvencional, la señora Orieta, sólo la vio en los tijerales de la casa que le construyó a don Iván. Deponen, además, los testigos Francisco Santis Zúñiga y Jorge Soto Briceño, quienes si bien están contestes en afirmar que don Iván García gastó alrededor de \$30.000.000.- en la construcción de la



«RIT»

Foja: 1

casa materia de la litis, solo explican tan afirmación por aseveraciones oídas al demandante reconvencional.

Sin embargo el actor reconvencional no ha rendido prueba alguna que permita establecer que dichos gastos los haya cubierto con patrimonio propio.

En efecto, no debemos olvidar que el demandante reconvencional afirma sobre este punto haber invertido en la construcción la suma de treinta millones de pesos, suma que trajo a “su vuelta de Estados Unidos a Chile”, dinero proveniente de sus ahorros y los de su cónyuge. Por otra parte la demandada reconvencional afirma que los gastos de la construcción de la vivienda fueron cubiertos por dinero de la madre de la demandada reconvencional, doña Ana Muñoz, quien efectuó depósitos al demandante por la suma de \$20.000.000.

Enseguida, del examen de las probanzas rendidas en estos autos no se puede establecer en modo alguno que los gastos de construcción de la vivienda materia de esta acción hayan sido cubiertos por valores propios del actor reconvencional ya que al afecto solo rindió el instrumento privado consistente en cartola de clientes de la empresa AFEX , en la cual se constan movimientos de recepción de dinero por cifras bastante menores a aquellas sumas que el actor reconvencional indica haber invertido en la vivienda y cuyo pago demanda.

Por el contrario, la demandada reconvencional rindió en autos probanzas que permiten tener por acreditada su aseveración en este punto. Efectivamente, en este orden de cosas rindió certificado de nacimiento de la demandada reconvencional en el que consta que doña Ana Esperanza Muñoz Lagos es su madre.

Aportó, además, copia de Libreta de Ahorros Banco Estado N° 36561040901, el que permite establecer que dicha cuenta tiene por titular a doña Ana Muñoz Lagos. Acompañó también copia de estados de cuenta ahorro Banco Estado N° 3656104091 que indican giros con fecha 6 de diciembre de 2013 por la suma de \$696.000, con fecha 9 de diciembre de 2013 por la suma de \$695.000, y con fecha 13 y 14 de enero de 2014 por las sumas de \$697.000 cada uno de ellos y copia de cuatro comprobantes de depósito por la suma de \$695.000 de fecha 9 de diciembre de 2013, por \$696.000 de fecha



«RIT»

Foja: 1

6 de diciembre de 2013, por \$697.000.- de fecha 14 de enero de 2014 y por la suma de \$697.000.- del 13 de enero de 2014, todos hechos en la cuenta corriente N° 38400005700 cuyo titular es don titular Iván Arturo García Oliveira.

Acompañó además copia de siete transferencias hechas desde la cuenta N° 24223115 del BCI a la cuenta N°38400005700 del Banco Estado, cuyo titular es don Iván García Oliveira, por \$700.000.- de fecha 8 de mayo de 2014, \$270.000 de fecha 5 de junio de 2014, por \$130.000 del 12 de junio de 2014, por \$300.000.- de fecha 19 de junio de 2014, por \$1.300.000.- del 25 de junio de 2014, por \$200.000 del 22 de septiembre de 2014, y \$200.000 de fecha 29 de octubre de 2014. Enseguida, en virtud de respuesta al oficio enviado como medida para mejor resolver al banco BCI agregada con fecha 26 de agosto de 2020, se puede establecer que la cuenta 24223115 pertenece a la demandada reconvencional doña Orieta Reyes Muñoz.

Estos instrumentos privados emanados de terceros que no han comparecido al proceso reconociéndolos ni ratificándolos, acompañados por la demandada reconvencional, en principio, nada acreditan por sí mismos.

Sin embargo, la demandada reconvencional acompañó también impresión de pantalla de cinco correos electrónicos de fechas 16 de febrero de 2014, 27 de febrero de 2014; 7, 12 y 19 de marzo de 2014, dirigidos entre el correo ivancit92@hotmail.com y el correo de la demandada reconvencional, respecto a los cuales además se llevó a efecto audiencia de percepción documental con fecha 31 de agosto del año en curso, audiencia a la cual asistieron ambas partes debidamente representadas. Del examen de dichos correos electrónicos se lee que desde el correo ivancit92@hotmail.com se pide a la demandada reconvencional que se le efectúe transferencias para el pago de maestros, el eléctrico y para el pago del maestro “Trujillo”, como, asimismo, para la compra de materiales. Se lee además en el correo de fecha 16 de febrero “cuando vienes para entregarte las cuentas del resto de los materiales ya que los maestros terminarán en 10 días más, para poder ver con tu mamá la plata del maestro y el resto de las cuentas”. Enseguida, el correo de fecha 27 de febrero termina con “Un abrazo, tu ex Iván”. Luego, en el correo de fecha 7 de marzo de 2014 se indica a la actora desde el correo



«RIT»

Foja: 1

ivancit92@hotmail.92 a la demandada reconvenzional que “total pendiente conmigo es \$3.115.412”

Asimismo, la demandada reconvenzional rindió testimonial, en la cual el testigo Alan Contreras declaró que quien entregaba el dinero para la construcción de la casa, era la señora Ana, lo que afirma constarle porque él también trabajó en la construcción de la casa y presencié como aquella “le pasaba plata ante mano para que construyera la casa”; y Johanna Valdivia Vargas que afirma que Ani, la madre de la demandada reconvenzional aportó los dineros para la construcción de la casa y todo lo que se hizo ahí , lo que sabe por haberlo escuchado decir a la demandada.

Así las cosas, las probanzas precedentemente referidas, analizadas en su conjunto, configuran las bases para construir, mediante un proceso lógico deductivo, una presunción judicial con mérito probatorio suficiente, por su gravedad y precisión, para dar por establecido el hecho de que el demandante reconvenzional construyó una casa habitación con valores o recursos de la propia demandada reconvenzional y de la madre de ésta, doña Ana Muñoz, en el terreno sub-lite.

Atendido lo anterior, no queda sino, rechazar la pretensión resarcitoria que dedujo el demandado principal en el segundo otrosí de su presentación principal rolante a folio 9, toda vez que no se logró acreditar el tercer requisito de la acción en análisis, esto es, que la construcción lo haya sido con valores propios.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que, corresponde ahora determinar si corresponde o no dar lugar a la pretensión resarcitoria de daño moral por \$30.000.000.- que , también invoca en el segundo otrosí de su presentación principal de folio 9, el demandante reconvenzional. Sobre este punto, cabe tener presente, que a la luz de lo expuesto por aquel, no queda claro si dicha pretensión está fundada en el incumplimiento del acuerdo de las partes de que el actor reconvenzional podía construir una vivienda en el terreno de la demandada reconvenzional y ocuparla hasta que aquella “quedara” para la hija en común de ambos, o si, deviene de que la demandada “pretende desconocer que existió un régimen patrimonial de sociedad conyugal no disuelta”. Sin perjuicio de ello y de haber invocado como norma infringida el artículo 1558



«RIT»

Foja: 1

del Código Civil, lo cierto es que el demandante reconvenicional reclama la reparación de un daño moral que se materializaría en una serie de enfermedades que dicha situación le ha ocasionado, respecto de las cuales no rindió prueba alguna en el proceso. De esta manera, y siendo el actor reconvenicional quien conforme al artículo 1698 del Código Civil tenía la carga de probar los daños causados, cuestión que no ocurrió, no queda sino desechar la reparación del daño moral reclamado.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, el resto de la prueba rendida nada aporta ni en nada obsta a las conclusiones anotadas. Así, el set de 2 fotografías allegado al proceso por la demandante principal a folio 66, en una en las cuales aparece una persona cuya identidad no se conoce y otra en que aparece un sitio cuya ubicación exacta no se acredita, nada aportan a los puntos de prueba fijados por el tribunal; lo mismo ocurre con el set de 4 fotografías acompañado también a folio 66, en que aparecen personas de identidad desconocida realizando limpieza en un sitio cuya ubicación no se acreditó en el proceso.

Otro tanto ocurre con el certificado de defunción de Jorge Orlando Reyes Miranda, la copia del Protocolo Operatorio de Clínica Oftalmológica Pasteur de Ana Muñoz Lagos, el certificado de avalúo fiscal y la copia simple de comprobante de pago de pensión de AFP Capital de Ana Muñoz, que en nada aportan a los puntos de prueba fijados por el tribunal; tampoco aportan a los puntos de prueba las copias de certificados de pago de contribuciones por encontrarse ilegibles y no ser posible, en consecuencia, obtener de ellos ninguna información que diga relación con el inmueble de marras.

Por las mismas razones antedichas carecen nada aportan en estos autos los set de fotografías que acompaña la parte demandada principal a folio 70 y 71 , relativas a tareas de limpieza en un sitio cuya ubicación exacta no fue acreditada, así como las denominadas “compartiendo Fiesta Tijerales” “año nuevo” y “compartiendo en casa Las Cruces”, pues por sí solos dichos documentos nada acreditan, en cuanto no se sabe la identidad de las personas que en dichas fotografías aparecen ni menos si corresponden realmente a las partes del juicio. Tampoco alteran en nada lo que se ha venido concluyendo la pericia rendida, teniendo presente que no se acreditó la concurrencia de los



«RIT»

Foja: 1

requisitos que hacían procedente la demanda reconvencional, ni las copias de sentencias de Corte Suprema Causa Rol 2554-2012, Causa Rol C-2091 seguida ante este tribunal, de Corte Suprema Causa Rol 13.561-2013 del 30 de septiembre de 2014, pues si bien la jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia puede orientar la correcta interpretación de las normas legales aplicables a casos similares, no es forzoso aplicar este criterio al caso concreto, pues de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3 del Código Civil: “Las sentencias judiciales no tiene fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.

Todas las antedichas probanzas se mencionan únicamente para los efectos procesales pertinentes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 3, 582, 588, 669, 700, 889 y siguientes, 1698, 1699, 1700, 1706, 1708 y 1709 del Código Civil; lo dispuesto en el Decreto Ley 2.695; y lo establecido en los artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346, 358, 383, 384 del Código de Procedimiento Civil; se declara:

En cuanto a la objeción de documentos:

I.- Que se rechazan, sin costas, las objeciones documentales deducidas por la demandante, en el cuarto otrosí de su presentación de folio 16.

II.- Que se rechazan, sin costas, las objeciones documentales deducidas por el demandado en su presentación de folio 81.

En cuanto a las tachas:

III.- Que se acoge, sin costas, la tacha formulada por el demandado a folio 65, en contra del testigo Juan Pablo Farías Serrano.

IV.- Que se rechazan, sin costas, las tachas formuladas por la demandante a folio 68, en contra del testigo Héctor Waldo Trujillo Contreras.

En cuanto a la demanda principal:

V.- Que **HA LUGAR** a la demanda deducida en lo principal de la presentación de fecha 7 de agosto de 2019 y, en consecuencia, se reconoce como de dominio de la demandante el inmueble reclamado y singularizado en la demanda, debiendo el demandado restituirlo al demandante, dentro de diez días corridos de ejecutoriada que sea esta sentencia.

En cuanto a las demandas reconvencionales:



«RIT»

Foja: 1

VI.- Que se rechaza la demanda reconvencional interpuesta por Iván Arturo García Oliveira, en el primer otrosí de su presentación de 6 de septiembre de 2019.

VII.- Que se rechaza la demanda reconvencional interpuesta por Iván Arturo García Oliveira, en el segundo otrosí de su presentación de 6 de septiembre de 2019.

VIII.- Que se condena en costas al demandado por haber resultado completamente vencido.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Dictada por **PALOMA FERNANDEZ FERNANDEZ**, Jueza Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **San Antonio, veintiocho de Septiembre de dos mil veinte**

